

Trabajo Fin de Grado

La actual situación financiera y fiscal de la Iglesia
Católica en España: propuestas de reforma a la luz
de la experiencia comparada

The current financial and tax situation of the
Catholic Church in Spain: reform proposal based on
comparative international experience

Autor

Francisco Javier Sorribas Galindo

Director

Fernando Rodrigo Sauco

Facultado de Economía y Empresa

2018

La actual situación financiera y fiscal de la Iglesia Católica en España: propuestas de reforma a la luz de la experiencia comparada.

Resumen

La cooperación económica entre el Estado y las confesiones religiosas, y la financiación pública que el primero ofrece a estas, es un asunto de gran importancia en nuestra sociedad. Esto es lo que analizaremos en este trabajo. Nos centraremos en el caso de la Iglesia Católica, fe mayoritaria en España, estudiando las relaciones que mantiene actualmente con el Estado y cómo han evolucionado las mismas. También analizaremos la situación de las restantes confesiones minoritarias y recurriremos al análisis de la experiencia internacional comparada para formular propuestas de mejora basadas en los principios económicos de suficiencia, autonomía y equidad, a la necesaria separación Iglesia-Estado y al derecho de libertad religiosa.

PALABRAS CLAVE: Cooperación económica, financiación, confesiones religiosas, laicidad, dotación presupuestaria, asignación tributaria, deducciones, incentivo fiscal, impuesto religioso, autofinanciación, acuerdo de cooperación.

The current financial and tax situation of the Catholic Church in Spain: reform proposal based on comparative international experience

Abstract

The economic cooperation between the State and the religious denominations, and the public funding that the first one offers to them, is an important matter in our society. We are going to analyse this in this study. We will focus in the case of Catholic Church, main faith in Spain, studying their present relations with the State and their historic development. We will also analyse the minority faith's position and we will study the comparative law and we will turn to the analysis of comparative international experience to formulate proposals for improvement based on the economic principles of sufficiency, autonomy and equity, the necessary separation of Church-State and the right to religious freedom.

KEY WORDS: Economic cooperation, funding, religious denominations, secular state, endowment budget, tributary allocation, tax deduction, tax incentives, church tax, self-financing, cooperation agreement.

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. Introducción..... | 1 |
| 2. Sistemas de financiación estatal de las confesiones religiosas..... | 2 |
| 3. Evolución histórica de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado..... | 3 |
| 4. La financiación directa de la Iglesia Católica en España desde 1978..... | 5 |
| a) Financiación derivada del AAE | |
| b) Otros supuestos de financiación | |
| c) Resumen económico | |
| 5. La financiación directa de las restantes confesiones religiosas en España..... | 11 |
| a) Financiación derivada de los Acuerdos de Cooperación | |
| b) Otros supuestos de financiación | |
| 6. La financiación indirecta de las confesiones religiosas en España..... | 15 |
| a) Beneficios fiscales de derivados de los Acuerdos de Cooperación | |
| b) Otros beneficios fiscales | |
| 7. Análisis valorativo de la financiación de las confesiones religiosas en España | 21 |
| 8. La financiación estatal de las confesiones religiosas en otros países de nuestro entorno..... | 25 |
| a) Modelos de financiación económica directa mediante dotación presupuestaria | |
| b) Modelos de financiación económica directa mediante asignación tributaria | |
| c) Modelos de financiación económica directa mediante la prestación de apoyo legal y administrativo | |
| d) Modelos sin financiación económica directa | |
| 9. Conclusiones y recomendaciones de política pública. Posibles extensiones del trabajo..... | 38 |
| Bibliografía..... | 41 |
| Anexos..... | 43 |

1. Introducción:

En este trabajo pretendemos analizar cuál es la situación fiscal y financiera de las confesiones religiosas en España, y por ende cuáles son las relaciones económicas entre el Estado y las mismas. Nos centraremos particularmente en el caso de la Iglesia Católica, puesto que es la confesión cuya feligresía posee, con diferencia, una mayor importancia numérica y un mayor arraigo en España, pero también expondremos la situación de las restantes confesiones.

No cabe duda de que el fenómeno religioso es una parte básica de toda sociedad y un pilar fundamental de toda cultura. España no es una excepción. Por ello, las relaciones que el Estado mantiene con las distintas confesiones religiosas se constituyen como una cuestión trascendental y de gran importancia. Por otra parte, hay que añadir que esta materia siempre ha sido objeto de un fuerte debate político en la sociedad, existiendo gran variedad de enfoques y opiniones acerca de cómo deben afrontarse estas relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas. Por estos motivos, este Trabajo de Fin de Grado analiza un tema económico relevante a nivel social e interesante para gran cantidad de personas para las que, por una razón u otra, el tratamiento que el Estado da al fenómeno religioso tiene una gran significación personal.

Para afrontar este estudio seguiremos un esquema de trabajo que exponemos a continuación. En primer lugar, expondremos brevemente cuáles son los posibles sistemas de financiación de las confesiones religiosas que pueden establecerse en un país, sin describir experiencias concretas. En segundo lugar, haremos un esbozo de la evolución histórica de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Español. A continuación, explicaremos cuáles han sido los distintos sistemas de financiación estatal de los que se ha beneficiado en España la Iglesia Católica desde los inicios de la democracia hasta la actualidad. En cuarto lugar, expondremos cuál es la financiación estatal que reciben el resto de confesiones religiosas en nuestro país. A continuación, estudiaremos de qué tipo de financiación indirecta se benefician en España las comunidades religiosas. Posteriormente, analizaremos cuál es la valoración de diversos expertos acerca del actual sistema de financiación de las confesiones religiosas en España. Tras esto, analizaremos cómo son las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en otros países (principalmente europeos) y qué tipos de financiación se han establecido.

Para finalizar, a la luz de todo lo anterior, expondremos las principales conclusiones del trabajo y propondremos diversas reformas del actual sistema de financiación de la Iglesia Católica en España, atendiendo, en primer lugar, a los principios económicos de suficiencia, autonomía y equidad, y también a los de separación Iglesia-Estado y libertad religiosa, y, en segundo lugar, al análisis efectuado de la experiencia internacional comparada.

2. Sistemas de financiación estatal de las confesiones religiosas:

En este apartado pretendemos exponer cuáles son los distintos métodos a través de los cuales puede establecerse una financiación estatal en favor de una o varias confesiones religiosas. No presentaremos aquí cual es la situación de países concretos, sino que simplemente expondremos los distintos modelos de financiación de las confesiones religiosas existentes (en Europa, principalmente).

La primera distinción importante hay que situarla en el hecho de que la cooperación económica del Estado con las confesiones religiosas puede canalizarse fundamentalmente de dos modos:

- De forma directa. En este caso, se establecen ayudas económicas directas del Estado a favor de las confesiones religiosas. La cooperación económica directa puede canalizarse a través de distintos instrumentos, que expondremos a continuación.
- De forma indirecta. En este caso, se establecen beneficios fiscales en distintos tributos a favor de las confesiones religiosas.

Con respecto a la **financiación económica directa**, existen fundamentalmente tres formas de implementarla, que de mayor a menor intensidad, serían:

- A través de dotaciones presupuestarias del Estado a favor de las confesiones religiosas (bien todas, solo una, o alguna de ellas). Esta fórmula de cooperación económica es incompatible con el principio de separación Iglesia-Estado.
- Mediante un sistema de asignación tributaria. En este caso, los contribuyentes pueden asignar un porcentaje de la cuota tributaria de un impuesto de carácter personal (lo más común es utilizar para este fin el impuesto que grava la obtención de renta) a favor de una confesión religiosa o varias. De esta forma, se establece una minoración de los ingresos públicos procedentes de determinados impuestos y esta cantidad es destinada a la financiación de las confesiones religiosas.
- A través de la prestación de apoyo legal y administrativo a las confesiones religiosas, de forma que estas puedan obtener de sus fieles determinadas contribuciones. En estos casos, puede establecerse un impuesto estatal con destino exclusivamente religioso o un impuesto religioso recaudado por el Estado. En estos casos, estrictamente no existe un trasvase de fondos públicos hacia las confesiones religiosas, pero sí es cierto que el Estado pone la administración tributaria al servicio de dichas confesiones, con el objetivo de que estas puedan obtener de los ciudadanos los recursos que necesitan.

Con respecto a la **financiación económica indirecta**, ya hemos comentado anteriormente que esta se implementa a través del reconocimiento de una serie de beneficios fiscales a favor de las confesiones religiosas. Estos pueden dividirse en dos grupos, que exponemos a continuación.

En primer lugar, se encuentran aquellos beneficios fiscales (supuestos de no sujeción, exenciones, etc.) que son aplicados directamente a las confesiones religiosas. Es decir, que se aplican sobre los impuestos que dichas confesiones deben satisfacer como sujetos pasivos.

En segundo lugar, se encuentran los beneficios fiscales reconocidos para aquellos individuos que contribuyen a la financiación de las confesiones religiosas. Por ejemplo, el caso más común es establecer incentivos fiscales a las donaciones a favor de las confesiones religiosas, para lo cual se establecen, por ejemplo, deducciones en la cuota íntegra del impuesto sobre la renta que deban satisfacer aquellas personas físicas o jurídicas que hayan realizado dichas donaciones. Este tipo de beneficios fiscales, si bien no se aplican directamente sobre las confesiones religiosas, tienen también gran importancia para su financiación.

3. Evolución histórica de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado

En este primer apartado expondremos brevemente la evolución de la relación entre el Estado Español y la Iglesia Católica desde mediados del S. XIX hasta los años de la transición democrática iniciada en 1977.

La Iglesia Católica ha sido hasta fechas recientes la única confesión que ha recibido financiación estatal en nuestro país. En líneas generales dicha financiación se mantuvo a lo largo de los siglos XIX y XX.

La primera ocasión en la que la financiación de la Iglesia Católica aparece mencionada como una obligación para los poderes públicos es en la Constitución de 1837. Nos encontramos en un contexto histórico y económico muy concreto. Y es que desde finales del S. XVIII se había iniciado en España el proceso de desamortización. Las desamortizaciones consistieron en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante subasta pública, las tierras y bienes que se encontraban en poder de las “manos muertas” (estas tierras y bienes no se podían vender, hipotecar o ceder), entre las cuales se encontraba la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. El principal objetivo de las desamortizaciones era obtener unos ingresos extraordinarios que sirvieran para atajar los problemas presupuestarios que padecía el país.

Las desamortizaciones y la abolición de los diezmos (el diezmo era un tributo a favor de la Iglesia Católica, cuyo pago se realizaba en especie, y cuyo nombre proviene del hecho de que lo recaudado era aproximadamente una décima parte de los frutos de la agricultura o la ganadería obtenidos por los fieles) situaron a la Iglesia Católica en una grave situación de crisis económica, que hacía peligrar sus posibilidades de financiación. En este contexto se ubica la Constitución de 1837 (precisamente en 1836 se había iniciado la desamortización de Mendizábal, una de las más importantes), la

cual compensaba económicamente a la Iglesia por los bienes expropiados. La financiación se basaba en recursos tributarios y la “dotación de culto y clero”, que alcanzaron una importancia relativa bastante alta en el total de los gastos del Estado.

Tras la Constitución de 1837, los posteriores textos constitucionales mantuvieron en la mayoría de los casos la obligación de otorgar financiación estatal a la Iglesia Católica. A continuación destacamos los rasgos fundamentales de los sucesivos textos constitucionales en referencia a las relaciones Iglesia-Estado.

La Constitución de 1845, a diferencia de la de 1837, declaraba la confesionalidad del Estado y reiteraba el compromiso estatal de mantenimiento del culto y los ministros de la religión católica.

La Constitución de 1869, promulgada durante el Sexenio Revolucionario, garantizó por primera vez en la historia del constitucionalismo español la libertad religiosa, aunque mantuvo la obligación de sustentar el culto y los ministros de la Iglesia Católica.

La Constitución de 1876, promulgada tras la restauración de la monarquía, volvió a declarar la confesionalidad católica del Estado y restableció la obligación de mantener el culto y a los ministros de la Iglesia Católica (esta obligación había sido puesta en entredicho durante el Sexenio Revolucionario, con un Proyecto de Constitución que finalmente no fue aprobado).

El mayor cambio en las relaciones entre la Iglesia y Estado se produjo con la llegada de la Segunda República y la Constitución de 1931, la cual declaró la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa. En este periodo se realizó un gran intento de poner fin a la dotación de culto y clero, recogiendo esta máxima en la propia Constitución, aunque estas previsiones no se vieron plenamente desarrolladas.

Tras la Guerra Civil, el régimen del General Franco derogó la legislación republicana en materia religiosa y reinstauró el carácter confesional del Estado. Volvió a establecerse la dotación presupuestaria a favor de la Iglesia Católica (dotación de culto y clero), la cual quedó consagrada en el Concordato con la Santa Sede de 1953. Tras la muerte de Franco en 1975 se mantuvo la financiación de la Iglesia Católica mediante dotación consignada en los Presupuestos Generales del Estado.

Las relaciones Iglesia-Estado y los sistemas de financiación de la Iglesia Católica tras la proclamación de la Constitución de 1978 serán abordados en los siguientes apartados.

4. La financiación directa de la Iglesia Católica en España desde 1978

En este apartado analizaremos la financiación estatal directa que ha recibido la Iglesia Católica desde la llegada de la democracia. Cabe distinguir en ella dos vertientes bien diferenciadas

- Por un lado, se encuentra la financiación que tiene su fundamento en el **Acuerdo de Asuntos Económicos (AAE)** firmado el 3 de Enero de 1979 entre España y la Santa Sede, el cual tiene el rango legal de tratado internacional.
- Por otro, se encuentra la financiación procedente de acuerdos o convenios alcanzados entre el Estado español y la Conferencia Episcopal Española.

A continuación exponemos cómo ha sido, cómo ha evolucionado y cómo es en la actualidad la relación entre el Estado y la Iglesia Católica en cuanto a estas dos vertientes de financiación directa.

a) Financiación derivada del AAE

En el artículo II del AAE se establecen algunos de los principios que regirán las relaciones económicas entre el Estado español y la Iglesia Católica.

El artículo II.1. afirma: *“El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”*.

Por su parte, el artículo II.5. afirma: *“La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. [...]”*.

Es decir, en el Acuerdo de Asuntos Económicos la Iglesia Católica asumió el objetivo de lograr en el medio plazo la plena autofinanciación, de forma que dejase de depender de la ayuda económica del Estado.

Para la consecución del objetivo, se establecieron tres fases que irían superándose progresivamente hasta alcanzar la autofinanciación de la Iglesia Católica. En cada una de estas fases transitorias se implementaría un modelo de financiación distinto.

En la primera fase se prorrogaba el sistema de dotación presupuestaria. En la segunda fase se establecería un sistema mixto, que combinase la dotación presupuestaria con la asignación tributaria. En la tercera y última fase se implementaría un sistema de asignación tributaria puro. Todo este proceso desembocaría finalmente en la consecución del objetivo de la autofinanciación. A continuación, explicamos brevemente las principales características de los sistemas establecidos en cada una de las fases del proceso.

● Dotación presupuestaria:

El artículo II.4. del AAE establece: *“En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia Católica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente. [...]”*. De esta forma, se establecía un sistema de financiación estatal continuista con respecto al anterior, es decir, con el establecido en el Concordato de 1953. Los Presupuestos Generales del Estado consignaban una partida destinada a la financiación de la Iglesia Católica. La cuantía de esta dotación, que era entregada a la Conferencia Episcopal Española, debía ser actualizada anualmente.

Este sistema se utilizó por primera vez en 1980. El AAE establecía que el modelo de dotación presupuestaria se utilizaría a lo largo de tres años, es decir, de 1980 a 1982. Llegados a este momento se pasaría a la siguiente fase, en la que se establecería el sistema mixto expuesto anteriormente.

Sin embargo, la utilización del sistema de dotación presupuestaria se dilató en el tiempo, concretamente hasta el año 1987. Y es que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1988 no se materializó el tránsito a la siguiente fase del acuerdo.

● Sistema mixto:

Como hemos comentado anteriormente, antes de alcanzar la autofinanciación de la Iglesia Católica, las relaciones entre esta y el Estado debían transitar desde un sistema de dotación presupuestaria a uno de asignación tributaria. Sin embargo, puesto que el modelo de asignación tributaria era algo muy novedoso, se decidió establecer entre ambos modelos un sistema mixto, de forma que existiese una fase de transición entre uno y otro.

El funcionamiento del sistema de asignación tributaria y del propio sistema mixto se encuentra recogido en los artículos II.2., II.3. y II.4. del AAE. En ellos se establecía que el Estado asignaría a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de un impuesto de carácter personal, siendo preciso que el contribuyente manifestase en la declaración su voluntad acerca de ello. En los artículos mencionados se añadía que este sistema sustituiría a la dotación presupuestaria de forma que proporcionara a la Iglesia Católica recursos de cuantía similar, y que en el proceso de sustitución, que duraría tres años, se implementaría un sistema mixto.

De esta forma, a partir de 1988 se estableció un modelo de asignación tributaria cuyo funcionamiento era el siguiente. Los contribuyentes podían destinar el 0,5239% de su cuota tributaria al sostenimiento de la Iglesia Católica. Alternativamente, también podían destinar este mismo porcentaje a otros fines de interés social. De esta forma, los contribuyentes debían manifestar en la declaración su voluntad en un sentido u otro. En el caso de que no se produjera esta manifestación, dicho porcentaje de la cuota tributaria se destinaría a otros fines de interés social.

Sin embargo, este modelo de asignación tributaria convivía con la dotación presupuestaria (de ahí que se le denominase como sistema mixto). Se consignaba en los presupuestos una partida destinada a la financiación de la Iglesia Católica, cuyo importe era igual al de la dotación presupuestaria del año 1987, actualizado anualmente. Posteriormente, dicha partida era minorada en una cuantía igual al importe recaudado a través del sistema de asignación tributaria.

Este sistema mixto se implementaría durante los años 1988, 1989 y 1990 (el propio AAE establecía en tres años la duración de esta fase), de forma que durante este trienio el importe recaudado por la Iglesia sería igual a la dotación presupuestaria de 1987, actualizada anualmente.

● **Asignación tributaria:**

El Acuerdo de Asuntos Económicos establecía que, tras el periodo de transición de tres años en el que se utilizaría el sistema mixto expuesto anteriormente, se implementaría un sistema de asignación tributaria puro. Es decir, a partir de 1991 debía desaparecer definitivamente la dotación presupuestaria, de forma que la Iglesia Católica se sustentara exclusivamente mediante lo recaudado a través de la asignación tributaria.

En base a este objetivo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 establecía que a lo largo de ese año la Iglesia recibiría mensualmente una doceava parte de la dotación presupuestaria de 1990, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria. Cuando se dispusiera de los datos definitivos del IRPF de dicho año, se procedería a la regulación definitiva.

De esta forma, se establecía un sistema de entregas a cuenta a la Iglesia Católica, cuyo propósito era evitar que la Conferencia Episcopal pudiera sufrir problemas de liquidez. Este modelo no desvirtuaba el sistema de asignación tributaria, puesto que una vez conocidos los resultados del correspondiente ejercicio fiscal, los anticipos realizados serían regularizados en un sentido o en otro.

Sin embargo, entre 1991 y 1993 el Estado no acometió las regularizaciones establecidas, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994 elevó a definitivas las cantidades entregadas a cuenta a la Iglesia Católica durante dichos años. Esta situación se prorrogó durante los siguientes ejercicios. A lo largo de todo este tiempo, la cuantía de las entregas a cuenta siempre fue superior a lo efectivamente recaudado a través de la asignación tributaria, por lo que en la práctica se mantuvo el sistema mixto.

La ley de Presupuestos Generales del año 2000 introdujo dos modificaciones importantes. Por un lado, se modificó el funcionamiento del sistema de asignación tributaria. Las autoridades eclesásticas habían criticado el hecho de que las dos opciones elegibles para afectar el porcentaje de tu cuota del IRPF (a la Iglesia Católica y a fines de interés social) fueran incompatibles entre sí, puesto que esto podía llevar a los contribuyentes a considerar que la Iglesia no realiza actividades de interés social.

De esta manera, se modificó el sistema de elección, existiendo a partir de este momento cuatro opciones:

- Colaborar con la Iglesia Católica y con otros fines de interés social → Se destinará el 0,5239% de la cuota del IRPF al sostenimiento de la Iglesia Católica y otro 0,5239% de la misma a fines de interés social.
- Colaborar solo con la Iglesia Católica → Se destinará el 0,5239% de la cuota del IRPF al sostenimiento de la Iglesia Católica.
- Colaborar solo con otros fines de interés social → Se destinará el 0,5239% del cuota del IRPF a fines de interés social.
- No manifestarse a favor de ninguna de las dos opciones → Se destinará el 0,5239% de la cuota del IRPF a gastos generales.

Por otra parte, la Ley de PGE del año 2000, manteniendo el sistema de entregas a cuenta, estableció que la Iglesia no podría recibir una cantidad superior a 24.000.000.000 de pesetas, pero tampoco una cantidad inferior a la resultante de la actualización de las entregas mensuales que, en concepto de pagos a cuenta de la asignación tributaria, se hubieran determinado en la Ley de Presupuestos del ejercicio anterior.

Este sistema de financiación se mantuvo hasta el año 2006. De esta forma, entre los años 1991 y 2006, pese a que el AAE establecía que el sistema de financiación que debía regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica era el de asignación tributaria, se mantuvo un modelo similar al sistema mixto. Algunos autores incluso califican este modelo de financiación como de “dotación presupuestaria encubierta”.

Finalmente, el cambio más importante que se produjo en el sistema de financiación de la Iglesia Católica sucedió tras la entrada en vigor de la Ley de PGE de 2007. Esta ley supuso la puesta en marcha de forma efectiva del sistema de asignación tributaria previsto para la tercera fase del camino de la Iglesia Católica hacia la autofinanciación.

Se acometieron diversas modificaciones. Se mantuvo el mismo modelo de asignación tributaria anterior (el contribuyente puede destinar un porcentaje de su cuota íntegra del IRPF al mantenimiento de la Iglesia Católica, a otros fines de interés social, a ambas cosas o a ninguna), pero se aumentó la cuantía de dicho porcentaje, que se elevó desde el 0,5239% anterior al 0,7% actual. Por otra parte, se mantuvieron las entregas mensuales a la Iglesia Católica, a cuenta de la cantidad correspondiente a lo recaudado a través de la asignación tributaria, pero se garantizó la realización de una liquidación provisional antes del 30 de noviembre del año siguiente y de una liquidación definitiva antes del 30 de abril de dos años posteriores.

De esta manera, a partir del año 2007 se alcanzó de forma definitiva la tercera fase planteada en el AAE, en la cual se implementaría un sistema de asignación tributaria puro. Este sistema se ha mantenido hasta la actualidad. Con respecto a la duración de esta etapa, el AAE no establece ningún plazo concreto, lo cual podría llevar a pensar que la prórroga de este sistema tiene una duración indefinida. Sin

embargo, conviene recordar que es la propia Iglesia Católica la que estableció en el Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979 el objetivo de la autofinanciación, por lo cual esta tercera fase no puede tener una vigencia indefinida (a no ser que ambas partes consideren que la situación actual se corresponde con la autofinanciación).

Por último, es importante tener en consideración que la Iglesia Católica también se ve beneficiada por la asignación tributaria del 0,7% de la cuota del IRPF de aquellos contribuyentes que optan por “Otros fines sociales”. Esto se debe a que la Iglesia Católica tiene bajo su tutela organizaciones de acción social y ayuda humanitaria (Cáritas es un ejemplo), las cuales se benefician de dicha asignación tributaria, que representa una parte relevante de su financiación.

Con el objetivo de completar la información, en los anexos (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) se recoge un resumen económico en el que se presentan los datos económicos relativos a la evolución de la financiación pública recibida por la Iglesia Católica entre 1980 y 2017, indicando las fuentes de dicha financiación.

b) Otros supuestos de financiación

Más allá de la cooperación económica establecida en el Acuerdo de Asuntos Económicos, existen otras actividades religiosas realizadas por la Iglesia Católica cuya financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Estas actividades son la asistencia religiosa en diversos establecimientos públicos y la impartición de enseñanza religiosa en los centros docentes públicos.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que junto al Acuerdo de Asuntos Económicos, el 3 de Enero de 1979 España y la Santa Sede firmaron otros tres acuerdos más (al igual que el AAE, con rango de tratado internacional). Estos fueron: **Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos (AAJ)**, Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos (abreviado como **Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, AARFA**) y **Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales (AEAC)**. A continuación comentamos la incidencia de estos acuerdos (y de otros acuerdos que se han alcanzado a nivel nacional) sobre las actividades desarrolladas por la Iglesia Católica comentadas anteriormente.

Con respecto a la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, el AAJ garantiza el derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, sean estos públicos o privados. Por su parte, el AARFA garantiza este derecho a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, pese a que estos acuerdos aluden a que el Estado debe garantizar la asistencia religiosa en estos establecimientos públicos, en ningún momento establecen que la financiación de dicha asistencia deba correr a su cargo.

Hasta la firma de estos acuerdos y durante unos pocos años después de la misma, esta asistencia religiosa era prestada por sacerdotes o religiosos que disfrutaban de la condición de funcionarios públicos (eran dependientes de la administración militar o del Ministerio de Justicia). Tras la firma de los acuerdos con la Santa Sede, el Estado continuaría financiando la asistencia religiosa en dichos centros, pero cesaría la relación funcional existente hasta el momento. En su lugar, el Estado dispuso unilateralmente, o bien alcanzó diversos acuerdos o pactos con la Conferencia Episcopal, de manera que se reformó el régimen económico de esta prestación asistencial, manteniendo en todo caso la financiación estatal.

Con respecto a la enseñanza de la religión católica en los centros docentes públicos, el AEAC establece en su Artículo II que los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica, aunque esta no tendrá carácter obligatorio. Es decir, la enseñanza católica es de oferta obligatoria para los centros docentes públicos, pero tiene carácter voluntario para los alumnos, que pueden elegir cursarla o no.

Por otra parte, el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales es ciertamente ambiguo en lo que atañe a la regulación de la financiación de la enseñanza de la religión católica, por lo que el régimen jurídico y económico de los profesores que imparten esta asignatura es incierto. El acuerdo simplemente establece en su artículo III que la enseñanza religiosa será impartida por personas designadas por la autoridad académica entre aquellas propuestas por el Ordinario Diocesano.

Llegados a este punto, es necesario distinguir dos tipologías de profesores que pueden ejercer la docencia de la religión católica. Por un lado, los funcionarios docentes que imparten la materia con la aprobación del Ordinario. Por otro, los docentes que carecen de la condición funcional. Los primeros, lógicamente, son remunerados por el Estado. La situación de los segundos, en tanto que son personas ajenas a la función pública, siempre ha sido controvertida.

Con respecto a este segundo grupo de profesores, el AEAC simplemente establece en su Artículo VII que su situación económica será concertada entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal. Finalmente, el Convenio de 26 de Febrero de 1999, firmado por los Ministros de Justicia y Educación y Cultura y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, estableció que el Estado asumiría la financiación de la enseñanza de la religión católica en centros públicos impartida por tales profesores, disponiendo que prestarán su actividad en régimen de contratación laboral, siendo pagados con las retribuciones correspondientes a los profesores interinos.

5. La financiación directa de las restantes confesiones religiosas en España

Analizaremos en este apartado de qué tipo de financiación estatal directa disfrutaban en nuestro país las confesiones religiosas no católicas. Para abordar este asunto, resulta imprescindible distinguir entre dos categorías de confesiones religiosas. Por un lado, se encuentran aquellas confesiones que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado. Por otro se encuentran aquellas que carecen de este estatus, encontrándose simplemente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Judíos, musulmanes y evangélicos son quienes han suscrito estos acuerdos de cooperación. Concretamente, el Estado alcanzó estos Acuerdos de Cooperación con la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCIE), la Comisión Islámica de España (CIE) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), los cuales empezaron a regir tras la aprobación de sus respectivas leyes, lo que sucedió en los tres casos el 10 de Noviembre de 1992. Estos tres acuerdos son prácticamente idénticos entre sí.

De esta forma, podemos distinguir entre la financiación derivada de los Acuerdos de Cooperación y la establecida unilateralmente por el Estado. Analizamos ambas vertientes a continuación.

a) Financiación derivada de los Acuerdos de Cooperación

En primer lugar, hay que mencionar que estos acuerdos en ningún caso establecen ningún tipo de cooperación económica a través de sistemas como la dotación presupuestaria o la asignación tributaria (como sí sucede con la Iglesia Católica).

Al igual que hicimos en el caso de la Iglesia Católica, nos centraremos ahora en la regulación que establecen los acuerdos en torno a dos importantes actividades realizadas por las confesiones: la asistencia religiosa en los establecimientos públicos y la impartición de enseñanza religiosa en los centros docentes públicos.

Con respecto a la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, los acuerdos actúan por dos vías. Por un lado, los tres acuerdos establecen en su Artículo 8 que se reconoce el derecho de los militares de dichas confesiones a recibir asistencia religiosa y a participar en actividades y ritos propios de su respectiva confesión. En ningún caso se alude a la financiación estatal de dicha asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, los acuerdos establecen en su Artículo 9 que se garantiza la asistencia religiosa de las respectivas confesiones a los internados en centros penitenciarios, hospitalarios, asistenciales y otros análogos del sector público. Esta asistencia religiosa tampoco cuenta con ningún tipo de financiación pública.

Con respecto a la enseñanza religiosa en los centros docentes públicos, se garantiza a las tres confesiones con acuerdo la impartición de la misma en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Esta disposición aparece recogida concretamente en el Artículo 10 de los respectivos acuerdos. La enseñanza religiosa será impartida por profesores designados por las respectivas comunidades. Con respecto a la financiación de dichas actividades, los acuerdos en ningún caso estipulan que sea el Estado quien deba encargarse de ella.

Sin embargo, que dicha financiación estatal no se estableciera en los acuerdos, no significa que quedara prohibida. Y es que tras la firma de los Acuerdos de Cooperación, el Estado y los representantes de FEREDE y CIE ratificaron a fecha de 12 de Marzo de 1996 dos convenios que regulaban precisamente la impartición de la enseñanza religiosa en los centros docentes públicos. Estos convenios establecieron que el Estado compensaría económicamente a las comunidades islámicas e iglesias evangélicas por los servicios prestados por las personas que imparten las respectivas enseñanzas religiosas en los centros docentes públicos.

En definitiva, los Acuerdos de Cooperación pactados con judíos, musulmanes y evangélicos no establecen, hablando en términos estrictos, ningún tipo de financiación estatal para dichas confesiones. Dicho esto, es cierto que CIE y FEREDE se benefician de la financiación estatal de la impartición de la enseñanza religiosa de sus respectivas confesiones en los centros docentes públicos, si bien esta financiación procede de los convenios alcanzados en 1996 (aunque, ciertamente, sobre la base establecida por los Acuerdos de Cooperación).

b) Otros supuestos de financiación

En el apartado anterior, hemos descrito la financiación de la que disfrutaban en España algunas confesiones religiosas no católicas. Esta financiación procede de los Acuerdos de Cooperación y los Convenios alcanzados, en 1992 y 1996 respectivamente. Durante un periodo de tiempo, esta fue la única financiación estatal de la que se beneficiaron las mencionadas confesiones con acuerdo.

Sin embargo, esta situación cambió de manera notable con la llegada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005. La disposición adicional tercera de esta ley estableció para dicho año una dotación de hasta 3.000.000 de euros para la financiación de proyectos que contribuyeran a una mejor integración social y cultural de las minorías religiosas, representadas estas por las confesiones que habían alcanzado un Acuerdo de Cooperación y por las confesiones con «notorio arraigo». Estas dotaciones, que en mayor o menor cuantía se han mantenido hasta nuestros días, son gestionadas por una fundación del sector público estatal creada con tal finalidad, la Fundación Pluralismo y Convivencia.

De esta forma, se establecía un sistema de financiación directa en beneficio de las confesiones religiosas con Acuerdo de Cooperación con el Estado (judíos,

musulmanes y evangélicos) y de aquellas que poseyeran la declaración de «notorio arraigo». En la actualidad, las confesiones que gozan de dicha declaración son La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), los Testigos Cristianos de Jehová, la Federación de Entidades Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa. El importe anual de las partidas otorgadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia se recoge en los anexos (Anexo 4).

Sin embargo, este sistema de financiación directa presenta notables diferencias con respecto al sistema de financiación del que se beneficia la Iglesia Católica.

Cuantitativamente, las cantidades otorgadas a través de dicho sistema de financiación directa son notablemente inferiores a las percibidas por la Iglesia Católica. La cuantía de estas dotaciones presupuestarias es decidida anualmente por los poderes públicos de forma unilateral y discrecional, y establecidas en las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cualitativamente, la dotación no se recibe directamente del Gobierno, como ocurre en el caso de la Iglesia Católica, sino de una fundación, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es quien se encarga de decidir sobre la concesión o no de estas ayudas económicas. Además, estos fondos pueden destinarse exclusivamente a la financiación de proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social, por lo que en ningún caso pueden ir destinados a la financiación del culto o el clero.

c) Análisis valorativo y comparativo del sistema de financiación directa de las confesiones religiosas

Ahora que hemos presentado los diferentes sistemas de financiación económica directa que el Estado establece en beneficio de las distintas confesiones religiosas, realizaremos una valoración comparativa acerca de la financiación directa recibida por la Iglesia Católica y por las confesiones religiosas minoritarias que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado, a la luz de los principios económicos mencionados anteriormente.

Con respecto al **principio de autonomía**, comprendido este como la capacidad de un ente para orientar y dirigir política y administrativamente su propia comunidad, no cabe duda de que las distintas comunidades religiosas poseen un alto grado de independencia con respecto al Estado en la gestión de sus asuntos internos.

Sin embargo, en lo que se refiere al **principio de autonomía financiera** (que se entiende fundamentalmente como la capacidad de decisión de una entidad sobre su propio sistema de ingresos) la situación varía. La Iglesia Católica, en cuanto que una parte fundamental de sus ingresos proceden de fondos públicos obtenidos a través del sistema de asignación tributaria, posee una reducida autonomía financiera (al menos en comparación con las restantes comunidades religiosas, que se benefician de una financiación directa menos generosa), puesto que su situación económica podría verse notablemente afectada por futuros cambios políticos. Por dar cifras concretas, la

Conferencia Episcopal Española recoge en su Memoria de Actividades de 2016 (la última disponible) que el 24% de los recursos empleados por las diócesis españolas proceden del sistema de asignación tributaria.

En lo que respecta al **principio de suficiencia**, entendido como la capacidad de una entidad para disponer de los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus cometidos, podemos señalar lo siguiente. En lo que se refiere a la Iglesia Católica, el propio Acuerdo de Asuntos Económicos recoge el compromiso del Estado de ofrecer a la misma, a través de los distintos sistemas de financiación establecidos (como explicamos anteriormente se establecieron tres fases, que irían superándose progresivamente), recursos de cuantía similar, partiendo de la base de las dotaciones presupuestarias establecidas a favor de la Iglesia Católica antes de 1979.

Por el contrario, en los Acuerdos de Cooperación alcanzados con FCIE, CIE y FERED, o en posteriores convenios ratificados con estas entidades, no se recoge ninguna garantía de suficiencia por parte del Estado, como sí parece existir en el caso de la Iglesia Católica.

En lo que respecta al **principio de no discriminación** (que se constituye como una suerte de principio de equidad) parece obvia la violación del mismo, a la luz de las enormes diferencias entre los sistemas de financiación directa establecidos a favor de la Iglesia Católica, por un lado, y las confesiones minoritarias con Acuerdo de Cooperación, por otro.

Esta discriminación puede apreciarse desde diversas perspectivas. Por un lado, puede apreciarse en el propio sistema de financiación económica directa establecido. Mientras que la Iglesia Católica se beneficia de un sistema de asignación tributaria que proporciona unos ingresos estables a lo largo del tiempo, las comunidades religiosas que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación reciben su financiación estatal a través de dotaciones gestionadas por una fundación del sector público, siendo los propios poderes públicos quienes deciden la cuantía de dichas dotaciones. Como puede apreciarse en su correspondiente anexo, la cuantía de los recursos otorgados a FCIE, CIE y FERED es considerablemente volátil, habiéndose producido una notable reducción de los mismos a lo largo de los últimos años. De esta forma, existe una clara discriminación en lo que se refiere a la **estabilidad en el tiempo** de los recursos percibidos.

Por otra parte, también existe discriminación en cuanto a la potestad de las diferentes comunidades religiosas para gestionar los recursos estatales percibidos. Mientras que la Iglesia Católica posee una plena capacidad para gestionar estos recursos, de forma que puede financiar con ellos aquellos gastos que considere oportunos, las comunidades religiosas con Acuerdo de Cooperación deben destinar las dotaciones otorgadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia a la financiación de proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social, de forma obligatoria.

De esta manera, en virtud del análisis de estos principios, podemos llegar a la conclusión de que el sistema de financiación económica directa de las confesiones religiosas vigentes en España otorga una posición de superioridad a la Iglesia Católica con respecto a las restantes confesiones religiosas. Por su parte, también es necesario mencionar que las confesiones minoritarias que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado (FCIE, CIE y FEREDe) cuentan a su vez con un trato jurídico y económico más favorable que aquellas que no han alcanzado acuerdos de este tipo, y simplemente se encuentran registradas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

6. La financiación indirecta de las confesiones religiosas en España

En los dos apartados anteriores expusimos que tipo de financiación directa reciben en España la Iglesia Católica y las restantes confesiones religiosas. En este apartado, abordaremos cual es la financiación indirecta existente en nuestro país. En este caso, trataremos en un mismo apartado la situación de la Iglesia Católica y de las restantes confesiones, puesto que el régimen de beneficios fiscales es similar en ambos casos. De esta manera, al tratar la información conjuntamente, el análisis comparativo será más sencillo.

De forma análoga a la financiación directa, dentro de la financiación indirecta cabe distinguir dos orígenes de la misma. Por un lado, se encontrarían los beneficios fiscales derivados de los Acuerdos de Cooperación entre las confesiones religiosas y el Estado (el Acuerdo de Asuntos Económicos alcanzado con la Iglesia Católica y los respectivos acuerdos alcanzados con FCIE, CIE y FEREDe). Por otro, los beneficios fiscales derivados de una legislación posterior.

a) Beneficios fiscales derivados de los Acuerdos de Cooperación

En los Acuerdos de Cooperación mencionados anteriormente se recogen una serie de beneficios fiscales, que se articulan a través de supuestos de no sujeción y exenciones. Los beneficios fiscales establecidos a favor de FCIE, CIE y FEREDe en sus respectivos acuerdos son idénticos entre sí, siendo a su vez muy similares a los reconocidos a favor de la Iglesia Católica en el AAE.

A continuación, exponemos este conjunto de beneficios fiscales a través de una tabla resumen, lo que facilitará la comparación entre la Iglesia Católica y las restantes confesiones con Acuerdo de Cooperación.

Para referirnos a los Acuerdos de Cooperación que el Estado estableció con FCIE, CIE y FEREDe utilizaremos el acrónimo AACC.

| | Tributo | Beneficio fiscal | Iglesia Católica | FCIE, CIE, FERED |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Supuestos de no sujeción | No sujeción a ningún impuesto | La organización de colectas públicas y la recepción de ofrendas, prestaciones y limosnas | Art. III AAE | Art. 11.2 AACC |
| | | La publicación por parte de las autoridades competentes de publicaciones, instrucciones, boletines y todo tipo de documentos, la entrega gratuita de los mismos a los miembros de la comunidad, y su fijación en los lugares de costumbre | Art. III AAE | Art. 11.2 AACC |
| | | La actividad de enseñanza religiosa en los centros de formación de las respectivas confesiones religiosas | Art. III AAE | Art. 11.2 AACC |
| | | La adquisición de objetos destinados al culto | Art. III AAE | — |
| Exenciones | IBI | Exención total y permanente para: los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias o locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los ministros de culto; los locales destinados a oficinas; los seminarios dedicados a la formación del clero y las Universidades eclesiásticas; los edificios destinados a casas o conventos de las Órdenes y Congregaciones religiosas | Art. IV. 1. A) AAE | — |
| | | Exención total para: los lugares de culto y sus dependencias o locales anejos; los locales destinados a oficinas; los centros dedicados a la formación de ministros de culto | — | Art. 11. 3. A) AACC |
| | IS | Exención total y permanente con la excepción de los siguientes rendimientos: los obtenidos por el ejercicio de explotaciones económicas, los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido, los sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta y las ganancias de capital | Art. IV. 1. B) AAEE | — |
| | | Exención en los términos previstos en el Artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades*. En ella se establece que no estarán exentos los siguientes rendimientos: los obtenidos por el ejercicio de explotaciones económicas, los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido y los incrementos de patrimonio. Sin embargo, los AACC establecen que sí estarán exentos los incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio de la caridad | — | Art. 11. 1. B) AACC |
| | ISD | Exención siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero y al ejercicio de la caridad | Art. IV. 1. C) AAEE | — |
| | ITPAJD | Exención siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas o asistenciales | Art. IV. 1. C) AAEE | Art. 11. 2. C) AACC |

Con respecto a estos beneficios fiscales recogidos en los Acuerdos de Cooperación deben hacerse una serie de precisiones necesarias.

En el caso del Impuesto de Sociedades, los Acuerdos de Cooperación alcanzados con FCIE, CIE y FEREDe establecían que estas confesiones religiosas estarían exentas de este impuesto en los términos previstos en la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, del Impuestos sobre Sociedades, dando lugar a las exenciones comentadas en el cuadro anterior.

Sin embargo, en la actualidad esta ley ya no se encuentra en vigor, puesto que la ley reguladora del impuesto vigente en nuestros días es la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. La Ley 27/2014 no hace una mención explícita a la Iglesia Católica y a las restantes confesiones con Acuerdo de Cooperación en el Artículo 9, referente a las exenciones (al contrario que la Ley 61/1978, que las mencionaba explícitamente en el Artículo quinto). La vigente ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades menciona en su Artículo 9 a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Explicaremos la relevancia de esto en el siguiente epígrafe.

Por otra parte, el Acuerdo de Asuntos Económicos firmado por España y la Santa Sede establece en su Artículo IV.2: *“Las cantidades donadas a los entes eclesíásticos enumerados en este artículo y destinadas a los fines expresados en el apartado C) darán derecho a las mismas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública”*. Esto no beneficia a la Iglesia Católica directamente, aunque sí lo hace de forma indirecta, puesto que establece una deducción en el IRPF para aquellos contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Iglesia Católica, equiparando el régimen de dichas donaciones al de las donaciones a favor de las entidades benéficas o de utilidad pública. De esta forma, esto constituye un incentivo fiscal a las donaciones a favor de la Iglesia Católica.

b) Otros beneficios fiscales

El conjunto de supuestos de no sujeción y exenciones expuesto anteriormente constituye el régimen mínimo de beneficios fiscales a favor de la Iglesia Católica y las confesiones minoritarias con Acuerdo de Cooperación. Sin embargo, este régimen se verá ampliado, como explicaremos en este epígrafe.

Esto se debe a que el Acuerdo de Asuntos Económicos alcanzado con la Santa Sede y los Acuerdos de Cooperación alcanzados con FCIE, CIE y FEREDe establecen que estas Comunidades, así como las asociaciones y entidades religiosas creadas y gestionadas por ellas y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas, hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento tributario establezca para las entidades sin fin de lucro. Esto se

establece en el Artículo V del AAE y en el Artículo 11.4 y 11.5 de los Acuerdos de Cooperación.

De esta forma, en virtud de estos artículos, la aprobación de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, supuso la asimilación de la Iglesia Católica y de las confesiones judía, islámica y evangélica a la regulación dada a las entidades sin fines lucrativos en esta ley, en lo que a beneficios fiscales respecta. Esto en la práctica significó el reconocimiento de un cuantioso repertorio de beneficios fiscales a favor de estas confesiones, superando el régimen de mínimos anterior.

A continuación exponemos los beneficios fiscales recogidos en esta ley, y que serán de aplicación para la Iglesia Católica, FCIE, CIE y FERED.

En primer lugar, el Capítulo II recoge la regulación aplicable en el **Impuesto sobre Sociedades**. El Artículo 6 expone cuales son las rentas exentas de tributación por este impuesto. Son las siguientes:

- Las derivadas de los siguientes ingresos:
 - a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial.
 - b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores.
 - c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
- Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
- Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos.
- Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente.
- Las que deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en los apartados de este artículo.

A continuación, el Artículo 7 enumera una larga lista de explotaciones económicas exentas. Las rentas procedentes de dichas explotaciones estarán exentas en el Impuesto de Sociedades, con la condición de que dichas explotaciones sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.

En segundo lugar, el Capítulo III, en su único Artículo 15, recoge la regulación aplicable en los **tributos locales**, estableciendo numerosas exenciones:

- Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, exceptuando aquellos afectos a explotaciones económicas no exentas del IS.
- Exención del Impuesto de Actividades Económicas por aquellas explotaciones económicas a que se refiere el Artículo 7 de esta ley.

- Exención del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la obligación legal de satisfacer este impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.

Por otra parte, los AACC alcanzados con FCIE, CIE y FEREDe establecen en el Artículo 11.6 que la normativa del IRPF regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos realizados a favor de estas comunidades, con las deducciones que pudieran establecerse.

La Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo establece en su Artículo 16 que serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo (es decir, que serán aplicables los incentivos fiscales a las donaciones, donativos y aportaciones hechas a su favor) aquellas entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen de beneficios fiscales que favorece a las entidades sin fines lucrativos.

Como los Acuerdos de Cooperación con FCIE, CIE y FEREDe asimilan su régimen de beneficios fiscales al de las entidades sin fines lucrativos, estas comunidades religiosas serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo. De esta forma, al igual que en el caso de la Iglesia Católica, existirán incentivos fiscales a la realización de donaciones a favor de estas confesiones religiosas.

Por último, falta por analizar la situación de las confesiones religiosas minoritarias que no han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado. Las confesiones religiosas son asociaciones sin ánimo de lucro, por lo que estas confesiones también serán susceptibles de verse favorecidas por los beneficios fiscales establecidos en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Sin embargo, estas confesiones deberán cumplir los requisitos exigidos en dicha ley para poder ser consideradas entidades sin ánimo de lucro, mientras que las confesiones que han firmado un Acuerdo de Cooperación con el Estado tienen directamente garantizado este estatus.¹

c) Análisis valorativo y comparativo del sistema de financiación indirecta de las confesiones religiosas

Al igual que hicimos al tratar la financiación económica directa que reciben las confesiones religiosas en España, realizaremos ahora una valoración comparativa acerca de la financiación indirecta de la que se benefician la Iglesia Católica y las restantes confesiones minoritarias.

¹ Algunos de los requisitos exigidos a una entidad para ser considerada entidad sin fines lucrativos son: deben perseguir fines de interés general; deben destinar a la realización de dichos fines al menos el 70% de sus rentas, debiendo ser destinadas el resto a incrementar la dotación patrimonial o las reservas; la actividad realizada no debe consistir en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria; los cargos de patrono, representante estatuario y miembro del órgano de gobierno deben ser gratuitos; deben cumplir las obligaciones contables y de rendición de cuentas previstas en la legislación; deben elaborar una memoria económica; entre otros.

Contrariamente a lo que sucedía en el caso de los sistemas de financiación directa, la financiación indirecta de la que se benefician la Iglesia Católica y las confesiones religiosas que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado no presenta grandes diferencias entre sí, de modo que el agravio comparativo es notablemente menor que en el caso de la financiación directa.

La asimilación del régimen fiscal, tanto de la Iglesia Católica como de FCIE, CIE y FERED, al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, constituye un marco común en el que se encuadra la financiación indirecta que reciben estas confesiones religiosas. Sin embargo, sí que es cierto que, más allá de este marco común, existen algunas diferencias entre los beneficios fiscales reconocidos a la Iglesia Católica en el AAE y los reconocidos a FCIE, CIE y FERED en sus respectivos acuerdos de cooperación. Los mencionamos brevemente a continuación.

Una de estas diferencias es la exención en el IBI de la residencia de los ministros de culto de la Iglesia Católica, beneficio fiscal que no es reconocido a los ministros de culto de FCIE, CIE y FERED. Esto resulta contrario al **principio de laicidad**, en cuanto otorga a los ministros de culto católico un trato privilegiado con respecto al resto de ciudadanos en algo que atañe exclusivamente a su esfera patrimonial individual. Por otra parte, también es contrario al **principio de no discriminación**, en tanto este beneficio fiscal no es reconocido para los ministros de culto de las restantes confesiones religiosas.

Por otra parte, se encuentra la no sujeción al IVA de las adquisiciones destinadas al culto católico. Este beneficio fiscal reconocido exclusivamente a la Iglesia Católica en el AAE se constituía claramente como un privilegio fiscal contrario al **principio de no discriminación**. Sin embargo, este beneficio fiscal ya no se encuentra actualmente en vigor. Esto se debe a su incompatibilidad con la normativa comunitaria europea sobre armonización fiscal en materia de IVA, lo que provocó que las autoridades europeas advirtieran a España en más de una ocasión de que la pervivencia de este beneficio fiscal era incompatible con las directrices vigentes. Finalmente, este supuesto de no sujeción fue eliminado en 2007, cuando se produjo la entrada en vigor del actual sistema de asignación tributaria.

En cualquier caso, en lo que a la financiación indirecta respecta, el trato discriminatorio no se produce tanto entre la Iglesia Católica y las restantes confesiones religiosas sino entre las confesiones que han alcanzado un acuerdo de cooperación con el Estado y aquellas que no. Mientras que las primeras tienen garantizado el régimen fiscal correspondiente a las entidades sin fines lucrativos, las segundas deben cumplir los requisitos exigidos en la ley 49/2002, mencionada anteriormente. Esto constituye una clara quiebra del **principio de no discriminación**, puesto que establece una serie de “trabas” para que las confesiones sin acuerdo puedan acceder a estos medios de promoción, mientras que estos sí son garantizados a las confesiones que han alcanzado un acuerdo de cooperación con el Estado, lo cual se traduce en una diferencia de trato jurídico.

7. Análisis valorativo de la financiación de las confesiones religiosas en España

En este apartado analizaremos cuales son los principios constitucionales que deben regir las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, y si el actual sistema de cooperación económica actúa de forma coherente con los mismos. Estudiaremos las opiniones de diversos autores respecto a esta cuestión.

Para empezar, expondremos brevemente cuales son los principios constitucionales que deben regular el sistema de cooperación con las confesiones religiosas.

En primer lugar, se encuentra el **principio de igualdad**, recogido en el Artículo 14 de la CE. En virtud de este principio, todo ciudadano español goza del derecho de igualdad ante la Ley, cualquiera que sea la religión, creencia religiosa o fe que profese, sin que su profesión de fe (o ausencia de ella) pueda privilegiarle o discriminarle frente a los demás conciudadanos y poderes públicos.

En segundo lugar, se encuentra el **principio de libertad religiosa**, recogido en el Artículo 16.1 de la Constitución, en el cual se reconoce la libertad religiosa y de culto de los individuos sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Este principio debe servir como directriz en la regulación establecida por el Estado en materia religiosa.

En última instancia, se encuentra el **principio de laicidad**, recogido en el Artículo 16.3 de la CE cuando se afirma que “*Ninguna confesión tendrá carácter estatal [...]*”. El principio de laicidad impide la identificación de los fines religiosos con los fines del Estado, de forma que este no puede en modo alguno mostrar conductas tendentes a potenciar los valores religiosos de los ciudadanos. También debemos hablar aquí del **principio de cooperación**, recogido igualmente en el Artículo 16.3, donde se establece el deber de cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Este mandato no obliga a que dicha cooperación sea de carácter económico, aunque esta tampoco se prohíbe. En cualquier caso, los tres principios comentados anteriormente (igualdad, libertad religiosa y laicidad) suponen un límite al principio de cooperación económica del Estado y las confesiones religiosas.

A continuación expondremos cual es la opinión de diversos autores acerca del sistema de financiación de las confesiones religiosas, en atención a los principios reguladores expuestos anteriormente. Concretamente, expondremos la opinión de tres autores que tienen puntos de vista muy diferentes, lo que nos aportará una rica variedad de enfoques y opiniones. También comentaremos brevemente cual debería ser, en opinión de estos autores, la evolución de esta regulación.

En primer lugar, expondremos la visión de **Isidoro Martín Sánchez**, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Autónoma de Madrid.

Este autor considera que la financiación estatal de las confesiones religiosas está constitucionalmente fundamentada en los artículos 9.2 y 16.3 de la CE. Con respecto al Artículo 16.3, la ayuda económica estatal, en cuanto no está expresamente prohibida, puede englobarse dentro de la obligación de los poderes públicos de mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas. Con respecto al Artículo 9.2, donde se estipula que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo (donde se engloba la libertad religiosa) sean reales y efectivas, la promoción del derecho de libertad religiosa se constituye como fundamento de las ayudas económicas concedidas a las confesiones.

Por otra parte, el autor considera que el sistema de financiación directa del que se beneficia la Iglesia Católica (y en mucha menor medida las confesiones minoritarias que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación) no supone una valoración por parte del Estado del fenómeno religioso, de modo que el sistema no es contrario al principio de laicidad. Alude de nuevo a que este tipo de financiación simplemente constituye una vía para llevar a cabo la promoción del derecho de libertad religiosa de los individuos pertenecientes a dichas comunidades.

De manera análoga, este autor niega que el actual sistema de financiación directa de la Iglesia Católica suponga un incumplimiento del principio de igualdad tributaria, en contra de lo que afirman otros sectores doctrinales. Considera que el sistema de asignación tributaria no equipara un fin religioso (y por tanto, extra estatal) y los fines de interés general, sino que simplemente promociona económicamente el derecho a la libertad religiosa de una confesión (necesaria para la consecución de la libertad religiosa de sus miembros), de forma que su objetivo es hacer posible un fin amparado constitucionalmente.

En última instancia, el autor sí que considera que el actual sistema de financiación de las confesiones es contrario al principio de igualdad religiosa. El hecho de que la financiación directa e indirecta esté reservada exclusivamente para aquellas confesiones que hayan alcanzado un acuerdo de cooperación con el Estado supone una diferencia de trato jurídico y una discriminación para aquellas tratadas desfavorablemente (y por tanto para sus miembros). Esto se debe a que el acceso a medios de promoción económicos por parte de determinadas confesiones las coloca en una posición de superioridad con respecto a las restantes, puesto que les proporciona mayores facilidades a la hora de difundir sus doctrinas y actividades.

A continuación exponemos cual es la percepción de **Isidoro Martín Degano**, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UNED.

Este autor recuerda que la financiación estatal prevista en el Acuerdo de Asuntos Económicos alcanzado con la Iglesia Católica tiene un carácter meramente transitorio (contrariamente al carácter estable con el que parece contar ahora), y que esta debe alcanzar su plena autofinanciación, como estipula el AAE.

Con respecto a la manera en que la Iglesia Católica podría percibir los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y alcanzar la autofinanciación, el autor considera que son tres las fuentes principales a las que esta debería recurrir: los donativos de sus fieles, la explotación de su patrimonio y la realización de explotaciones económicas. Dado que la utilización de los dos últimos recursos podría dar lugar a situaciones conflictivas, este profesor considera que la mentalización de los fieles en el sostenimiento de su comunidad religiosa debe ser la vía por la que la Iglesia Católica alcance la autofinanciación. En cualquier caso, el autor reconoce que alcanzar esta situación es algo todavía muy remoto.

Sin embargo, este autor hace una importante matización con respecto al concepto de autofinanciación mencionado en el AAE. Considera que este objetivo de autofinanciación se refiere exclusivamente a aquellas actividades específicas de la Iglesia, como la sustentación del culto y el clero, quedando excluidas de la misma otras actividades como la beneficencia, la educación o la asistencia social. De esta forma, una vez alcanzada la suficiencia económica, la Iglesia, en virtud de lo establecido en el Artículo II.5 del AAE, podría seguir contando con ayudas económicas estatales para la realización de estas actividades no estrictamente religiosas y que contribuyen a la consecución de fines sociales.

En definitiva, el autor considera necesario (aunque le parece por ahora algo lejano) que la Iglesia Católica alcance la autofinanciación (entendida esta como la suficiencia para financiar por sí misma el culto y el clero), pero que una vez alcanzada, el Estado podría llegar a acuerdos con la misma para financiar la realización de las mencionadas actividades de interés social que coincidan con los objetivos estatales.

En última instancia, presentaremos la visión de **Alejandro Torres Gutiérrez**, Catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra. Este autor es quien mantiene un posicionamiento más beligerante con el actual sistema de financiación de las confesiones religiosas, y en concreto, de la Iglesia Católica.

Este catedrático considera que el establecimiento de manera estable de un sistema de asignación tributaria como método de financiación de la Iglesia Católica supone una vulneración del principio de laicidad del Estado, recogido en el Artículo 16.3 de la Constitución, puesto que establece de forma indefinida un sistema de financiación de la Iglesia Católica con cargo a una minoración de los ingresos públicos. Por otra parte, esta solución contradice lo establecido en su día en el AAE, donde la Iglesia Católica adquirió el compromiso de la autofinanciación.

Pese al reconocimiento en la CE del principio de cooperación con las confesiones religiosas, este está supeditado al cumplimiento del principio de laicidad, que impide la identificación de los fines religiosos con los fines del Estado, constituyendo un límite para el primero. De esta manera, no puede aceptarse cualquier tipo de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, ya que esto podría suponer que el principio de laicidad quedara vacío de contenido.

De esta manera, el autor considera que el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica supone una quiebra de los principios constitucionales de laicidad, libertad religiosa e igualdad. En cualquier caso, añade que extender este sistema de cooperación económica a otras confesiones religiosas, en aras de lograr una mayor igualdad entre las mismas y la Iglesia Católica, no supondría más que un empeoramiento de la situación desde el punto de vista de la separación entre el Estado y el fenómeno religioso.

El autor considera que la solución al problema de la financiación de la Iglesia Católica y las restantes confesiones pasa por la mentalización de los fieles de que son ellos mismos quienes deben comprometerse con el sostenimiento económico de la fe cuyo credo dicen compartir. En cumplimiento del principio de cooperación, el Estado podría incentivar las donaciones de los fieles a favor de sus respectivas comunidades religiosas a través de deducciones fiscales cuyo tipo de desgravación fuera superior al actualmente establecido. Estas disposiciones deberían extenderse a todas las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, de forma que se construyera un marco legal plenamente compatible con los preceptos constitucionales.²

En el caso concreto de la Iglesia Católica, esta fórmula de cooperación económica ayudaría a la consecución de dos grandes objetivos. Por una parte, la plena autofinanciación. Por otra, la independencia con respecto al Estado, lo que la libraría de posibles influencias debidas a futuros cambios políticos.

En última instancia, resumimos cuáles son los **puntos de acuerdo** y las **discrepancias fundamentales** que existen en los análisis que estos autores hacen acerca del sistema de financiación de las confesiones religiosas en España.

Como mencionamos anteriormente, los tres autores presentados mantienen opiniones bastante distantes entre sí, pero podríamos localizar como punto de acuerdo la consideración de que el actual sistema de financiación de las confesiones religiosas es contrario al principio de igualdad religiosa, puesto que sitúa a la Iglesia Católica, principalmente, y a las confesiones que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado en una posición privilegiada con respecto a las restantes confesiones religiosas, otorgándoles un trato jurídico y económico más favorable.

Sin embargo, las soluciones propuestas difieren enormemente unas de otras. Estas propuestas van desde la extensión de la financiación estatal a las restantes confesiones religiosas minoritarias hasta la total supresión de dicha cooperación económica directa, pasando por una posibilidad intermedia consistente en la financiación de actividades no estrictamente religiosas de carácter social realizadas por las distintas comunidades religiosas.

² A este respecto es necesario señalar que ya se ha avanzado en este aspecto, puesto que las entidades acogidas a la denominada ley de mecenazgo de 2002, entre las que se encuentra la Iglesia Católica, han visto como el régimen de los donativos que reciben de sus fieles ha experimentado una importante mejora fiscal en el IRPF desde 2015.

De esta manera, no parece haber consenso académico entre los autores españoles, por lo que puede ser interesante analizar cómo se han guiado otros países occidentales, con el objetivo de poder prever algunas líneas de reforma para años venideros. A este propósito le dedicamos el siguiente apartado.

8. La financiación estatal de las confesiones religiosas en otros países de nuestro entorno

En el apartado 2 expusimos cuales eran los distintos sistemas a través de los cuales podía establecerse una financiación estatal en beneficio de una o varias confesiones religiosas. En este apartado, analizaremos brevemente cómo se acomete en la práctica esta cooperación económica en diversos países de nuestro entorno, especialmente países europeos.

a) Modelos de financiación económica directa mediante dotación presupuestaria

Existen en Europa numerosos casos en los cuales el Estado ha establecido un sistema de financiación directa a través de dotación presupuestaria. Exponemos algunos ejemplos a continuación.

Grecia

En Grecia, el Cristianismo Ortodoxo es la fe profesada por la enorme mayoría de los ciudadanos. La Constitución de Grecia establece el Cristianismo Ortodoxo como la religión oficial del Estado, otorgándole a la Iglesia Ortodoxa de Grecia un grado especial de consideración que no es extendido al resto de confesiones religiosas.

La Iglesia Ortodoxa de Grecia posee su propio estatus legal con personalidad legal reconocida en el Derecho Público. Junto al Judaísmo y el Islam, son las únicas confesiones religiosas que poseen personalidad legal en el Derecho Público, mientras que el resto de comunidades religiosas poseen personalidad legal exclusivamente en el Derecho Privado.

El Gobierno Griego financia gran parte de las necesidades económicas de la Iglesia Ortodoxa Griega a través de fondos públicos, con cargo a los presupuestos del estado. Estas dotaciones presupuestarias están destinadas principalmente a la retribución del clero, lo cual abarca tanto el pago de sueldos como de pensiones, la financiación de los costes de formación del mismo o el mantenimiento de los edificios religiosos ortodoxos.

Noruega

La Constitución de Noruega, aprobada en 1814, se vio sometida en 2012 a diversas enmiendas que modificaron algunos de sus artículos referentes a la relación entre la Iglesia Evangélico-Luterana (la confesión mayoritaria del país) y el Estado. A continuación exponemos cual es el estatus de las confesiones religiosas tras esta reforma constitucional y cuál es la financiación pública otorgada a las mismas.

El Artículo 16 de la Constitución Noruega garantiza el derecho de los ciudadanos a profesar libremente su religión. Sin embargo, este artículo también establece que la Iglesia Evangélico-Luterana será la Iglesia Oficial de Noruega y afirma que será financiada por el Estado. A esto añade que todas las comunidades religiosas serán financiadas en iguales términos.

Por su parte, el Artículo 4 afirma que el Rey deberá profesar la religión evangélico-luterana.

De esta forma, existen importantes lazos entre la Iglesia Evangélico-Luterana y el Estado, aunque estos eran más fuertes antes de la aprobación en 2012 de las mencionadas enmiendas constitucionales³. A continuación explicamos cómo es el sistema noruego de financiación de la Iglesia Evangélico-Luterana y otras confesiones religiosas minoritarias.

En Noruega, la Iglesia Evangélico-Luterana consigue su financiación a través de dotaciones presupuestarias con cargo al presupuesto estatal o a los presupuestos municipales. Esto diferencia a Noruega del resto de países nórdicos, donde generalmente las confesiones religiosas se financian a través de impuestos religiosos (explicaremos estos sistemas de financiación más adelante).

Inicialmente, esto situaba a la Iglesia Evangélico-Luterana en una clara posición de predominio sobre las restantes confesiones religiosas. En aras de lograr una mayor equidad entre las distintas comunidades religiosas y de garantizar el derecho a la libertad religiosa, en 1969 fue aprobada la Ley de comunidades de fe. Esta ley permite a las confesiones religiosas decidir si quieren acceder al registro estatal o no. Las comunidades no registradas disfrutaban de la mayoría de derechos de los que disfrutaban aquellas que sí están registradas. Esta ley también establece que las confesiones religiosas minoritarias, se encuentren registradas o no, recibirán financiación pública para realizar sus actividades, a través de partidas consignadas en los presupuestos estatales y municipales. La cuantía de estas partidas dependerá del número de fieles con los que cuentan estas comunidades, de forma que la financiación per cápita recibida

³ Antes de la reforma constitucional de 2012, el Rey de Noruega ostentaba importantes poderes en los asuntos relacionados con la Iglesia Oficial. Como cabeza de la Iglesia, el Rey tenía el deber de organizar todo lo concerniente a los servicios eclesiásticos y cultos públicos de la Iglesia Evangélico-Luterana (en virtud del Artículo 16) y era el encargado de escoger y nombrar a los altos funcionarios eclesiásticos (en virtud del Artículo 21). En cualquier caso, el rey delegaba algunas de estas responsabilidades en diversas instituciones eclesiásticas. Por otra parte, con anterioridad a la reforma constitucional, el Artículo 12 establecía que más de la mitad de los miembros del Consejo de Estado (es decir, los miembros del Gobierno) debían profesar la religión oficial del Estado.

por cada una de estas confesiones minoritarias será igual a la financiación per cápita recibida por la Iglesia Evangélico-Luterana, la Iglesia estatal.

Otros casos

Además de Grecia y Noruega, cuyos casos hemos expuesto detalladamente, en Europa existen numerosos países que han establecido un sistema de financiación económica directa de las confesiones religiosas a través de dotación presupuestaria. Expondremos brevemente la situación de algunos de ellos a continuación.

En Europa Occidental destaca el caso de **Bélgica**, donde el Estado reconoce y financia a algunos grupos religiosos. Concretamente son seis las confesiones reconocidas por el Estado: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Confesión Anglicana, la Confesión Judía, la Confesión Islámica y la Iglesia Ortodoxa. El Estado se hace cargo del pago de los salarios y las pensiones de los ministros de culto de las confesiones reconocidas. Para ello, el Gobierno consigna las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, los sistemas de cooperación con las confesiones religiosas mediante dotaciones presupuestarias son más comunes en Europa del Este, donde la mayoría de países se han decantado por esta opción. **Rumanía, Bulgaria o Eslovaquia**, entre otros, serían ejemplos de países que han implementado sistemas de cooperación económica de este tipo.

b) Modelos de financiación económica directa mediante asignación tributaria

España, como hemos explicado a lo largo del trabajo, es uno de los países en los que se ha implementado un sistema de asignación tributaria. Sin embargo, en Europa también existen otros casos similares. Los presentamos a continuación.

Italia

Italia es un país en el que el catolicismo es el credo religioso ampliamente mayoritario. Aproximadamente 58 millones de italianos están bautizados en la fe católica, lo que representa en torno al 95% de la población. A esto hay que añadir que la residencia del Papa, la Ciudad del Vaticano, es un enclave situado dentro de la ciudad de Roma. Esto ayuda a entender el hecho de que la Iglesia Católica siempre haya tenido una gran influencia sobre la política y la sociedad italiana.

La actual Constitución Italiana, aprobada en 1947, garantiza la libertad individual en los asuntos referidos a la religión y ofrece un sistema de cooperación entre el estado y las confesiones religiosas.

Con respecto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, estas se rigen a través del Concordato de 1984, que tiene el rango de tratado internacional. Fue

precisamente en este año cuando se formalizó el principio de no confesionalidad del Estado.⁴

En lo referente a las restantes comunidades religiosas, el Artículo 8 de la Constitución afirma que sus relaciones con el Estado serán reguladas sobre la base de acuerdos con sus respectivos representantes. De esta manera, las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias serán reguladas a través de acuerdos (*intesa* en italiano).⁵

Con respecto al sistema de financiación de las confesiones religiosas, en Italia se ha establecido un sistema de asignación tributaria similar al español. En este caso, los contribuyentes italianos pueden elegir el destino del 0,8% de la cuota tributaria del impuesto sobre la renta, cantidad que pueden asignar a una de las siguientes tres opciones:

- El Estado italiano, que lo destinará a medidas contra el hambre, desastres naturales, ayuda a refugiados o conservación de bienes culturales.
- La Iglesia Católica.
- Las confesiones religiosas minoritarias que han alcanzado un acuerdo con el Estado (es decir, las mencionadas anteriormente).

Sin embargo, este sistema presenta una diferencia notable con respecto al sistema de asignación tributaria español. La cuantía correspondiente a la asignación tributaria de aquellos contribuyentes que no se hayan decantado por ninguna opción será repartida entre los distintos destinatarios en proporción a lo expresado por los contribuyentes que sí han elegido una de las opciones existentes. Esto beneficia enormemente a la Iglesia Católica Italiana, puesto que es con diferencia la opción más popular entre aquellos que se decantan por una opción determinada (en torno a un 80% de los italianos que eligen una opción se decantan por la Iglesia Católica), lo que conduce a que reciban este mismo porcentaje de la asignación tributaria de quienes no han hecho elección alguna. Por el contrario, algunas confesiones religiosas minoritarias han renunciado a los ingresos procedentes de este sistema de prorrateo, de forma que solo perciben la asignación tributaria de aquellos contribuyentes que se han decantado expresamente por estas confesiones.

⁴ Hasta este momento, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica estaban reguladas por los Pactos de Letrán, una serie de acuerdos alcanzados entre Italia y la Iglesia Católica en 1929, durante el régimen fascista de Benito Mussolini. En virtud de estos pactos, la religión Católica Apostólica Romana fue reconocida hasta 1984 como la única religión del Estado.

⁵ Hasta el momento, el Estado Italiano ha alcanzado acuerdos de este tipo con hasta doce confesiones minoritarias, muchas de las cuales son comunidades protestantes y evangélicas. Son las siguientes: Iglesia Evangélica Valdense, Asambleas de Dios en Italia, Unión Italiana de las Iglesias Cristianas Adventistas del 7º día, Unión de Comunidades Hebreas Italianas, Unión Evangélica Cristiana Bautista de Italia, Iglesia Evangélica Luterana en Italia, Santa Arquidiócesis Ortodoxa de Italia y Exarcado para el sur de Europa, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Apostólica en Italia, Unión Budista Italiana, Unión hindú Italiana e Instituto Budista Italiano Soka Gakkai. Los acuerdos de este tipo deben ser ratificados por el Parlamento Italiano.

En cualquier caso, la cuantía de los fondos públicos que la Iglesia Católica recibe cada año por una sorprendente variedad de razones es en realidad mucho mayor (de hecho, ni siquiera se conoce esta cifra con exactitud). De esta forma, lo obtenido a través del mecanismo de asignación tributaria representa solamente una pequeña parte del total de fondos públicos que la Iglesia Católica Italiana recibe anualmente del Estado y las administraciones regionales y locales. Mientras que la cuantía de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica ha oscilado durante la última década en torno a los 1.000 millones de euros, algunos estudios calculan que realmente recibe cada año más de 8.000 millones de euros de fondos públicos. Esto sitúa a la Iglesia Católica en una posición predominante con respecto al resto de confesiones religiosas.

Portugal

En Portugal, la Iglesia Católica es el grupo religioso ampliamente mayoritario. Aproximadamente un 85% de los portugueses profesan la fe católica.

La Constitución Portuguesa de 1976 garantiza la libertad religiosa y establece la separación entre el Estado y las comunidades religiosas. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se articulan a través del Concordato alcanzado entre Portugal y la Santa Sede en 2004, el cual reconoce la personalidad legal de la Conferencia Episcopal Portuguesa.

Con respecto a las restantes confesiones religiosas, existe un marco legal que permite a las comunidades religiosas minoritarias alcanzar la “declaración de radicación en el país”. Este estatus cualifica a las confesiones religiosas para obtener privilegios fiscales, otorga reconocimiento legal a sus ceremonias matrimoniales y les permite la instrucción religiosa en los colegios públicos, entre otras cosas.

En lo que respecta a la financiación de las confesiones religiosas, en Portugal se ha establecido un sistema de asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica y las confesiones con declaración de radicación en el país. Este sistema es similar al implementado en España e Italia, aunque mantiene con respecto a ellos algunas diferencias que comentaremos posteriormente.

El funcionamiento concreto del sistema de asignación tributaria es el siguiente. Los contribuyentes portugueses pueden destinar el 0,5% de la cuota tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas a fines religiosos o a fines de beneficencia. De esta forma, pueden elegir el destino de su cuota tributaria entre las siguientes opciones:

- A favor de la Iglesia Católica.
- A favor de una comunidad religiosa con declaración de radicación.
- A favor de una persona colectiva de utilidad pública cuyos fines sean de beneficencia, asistencia, humanitarios, o de una institución particular de solidaridad social.

Las características propias de este sistema de asignación tributaria son las siguientes. En primer lugar, este beneficio económico se concede a las confesiones religiosas sin la necesidad de que estas hayan alcanzado un acuerdo con el Estado, como ocurre en Italia. Por el contrario, basta con que hayan alcanzado la declaración de radicación y realicen un requerimiento expreso para acceder a este sistema

En segundo lugar, en el caso de los contribuyentes que se decantan por destinar el 0,5% de su cuota tributaria a fines de beneficencia, asistencia, humanitarios o de solidaridad social, deberán ser ellos mismos quienes manifiesten la entidad concreta a la cual se destina este importe

Por último, al contrario de lo que sucede en España, los contribuyentes no pueden mostrar su preferencia a favor de ambas opciones (fines religiosos y fines de beneficencia).

Hungría

Tras España, Italia y Portugal, Hungría completa la lista de países europeos que han establecido un sistema de asignación tributaria para financiar a las confesiones religiosas.

El funcionamiento del sistema de asignación tributaria húngaro es el siguiente. Los contribuyentes pueden afectar el importe correspondiente al 1% de la cuota tributaria del impuesto sobre la renta a los siguientes destinos:

- A favor de un fondo público.
- A favor de una confesión religiosa.

A esto hay que añadir que los contribuyentes también pueden destinar otro 1% de su cuota tributaria a favor de una ONG, museos, teatros y otras instituciones públicas.

Las confesiones religiosas que pueden acceder a este sistema de financiación pública son aquellas que se inscriben en los registros estatales, para lo cual es necesario cumplir dos requisitos: deben tener al menos 100 seguidores y deben redactar un acta constitutiva o memorándum organizacional.

Actualmente, más de una quincena de comunidades religiosas se ven beneficiadas por el sistema de asignación tributaria. La fe mayoritaria del país es la católica, pero aproximadamente un 15% de la población pertenece a la Iglesia Reformada y en torno a un 3% a la Iglesia Luterana. Junto con la Comunidad Judía, estas cuatro confesiones religiosas son vistas como las “religiones históricas” de Hungría.⁶

⁶ A esto hay que añadir que el Gobierno Húngaro también destina fondos públicos a favor de las comunidades religiosas para el mantenimiento del patrimonio histórico-cultural, la reconstrucción y renovación de instituciones religiosas, o a modo de compensación por la propiedad religiosa confiscada durante el periodo socialista y todavía no devuelta.

c) Modelos de financiación económica directa mediante la prestación de apoyo legal y administrativo

Como comentamos en el apartado 2, en estos casos el Estado pone la administración tributaria al servicio de una o varias confesiones religiosas. Este modelo de financiación se implementa a través de un impuesto eclesiástico, dentro del cual pueden distinguirse dos modalidades: un impuesto estatal con afectación a fines religiosos o un impuesto religioso recaudado por el estado.

Esta fórmula de cooperación económica con las confesiones religiosas se encuentra especialmente extendida en los países nórdicos y algunos países centroeuropeos. A continuación comentamos algún caso concreto

Alemania

La Constitución de la República Federal de Alemania, aprobada en 1949, establece la libertad religiosa y garantiza la libertad de las organizaciones religiosas para regular y administrar sus propios asuntos. Por otra parte, la Constitución establece que no existe una religión estatal. Sin embargo, las dos confesiones mayoritarias (que son la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, cada una con aproximadamente 25 millones de fieles) mantienen relaciones muy cercanas con el Estado.

En Alemania, existen distintos regímenes fiscales aplicables a las confesiones religiosas, los cuales conllevan distintas regulaciones. Explicamos esto a continuación.

En primer lugar, algunas confesiones religiosas pueden alcanzar el estatus jurídico de Corporación de Derecho Público. Este estatus les confiere importantes ventajas, siendo la más destacada la capacidad de recaudar impuestos en base a las listas fiscales civiles.

Por otra parte, las confesiones religiosas también pueden alcanzar el estatus de entidades con fines de utilidad pública o entidades con fines caritativos. Estos estatus también permiten a las confesiones beneficiarse de algunas ventajas fiscales, pero estas son mucho menos relevantes que las garantizadas a las confesiones religiosas calificadas como Corporación de Derecho Público.

La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica poseen el estatus de Corporación de Derecho Público, aunque no son las únicas, puesto que cualquier organización religiosa (e incluso organizaciones no religiosas o filosóficas) pueden lograrlo. De este modo, las congregaciones judías y el Ejército de Salvación (una institución protestante) han alcanzado también este estatus.

De esta manera, en Alemania algunas confesiones pueden recaudar un impuesto religioso (*kirchensteuer* en alemán) a través de la Hacienda Pública. Este sería por lo tanto un impuesto religioso recaudado por el Estado. A continuación explicamos el funcionamiento específico del mismo.

El impuesto religioso alemán consiste en un recargo individual sobre los impuestos sobre la renta y los rendimientos individuales del trabajo. Este recargo se establece sobre la cuota tributaria de los contribuyentes y su importe puede ser del 8% o del 9%, en función del *Länder* (este es el nombre que reciben los distintos estados que conforman la República Federal de Alemania) en que resida el contribuyente. Generalmente, los pensionistas, los desempleados y las personas con rentas reducidas no pagan el impuesto religioso. Las confesiones religiosas beneficiadas por este sistema pagan al estado un porcentaje del ingreso recaudado (que oscila entre el 2% y el 5%) en concepto de costes de administración del impuesto.

Es importante tener en cuenta que se trata de un impuesto de pertenencia, de forma que quien lo desee puede solicitar la baja de las listas que se emplean para recaudar el impuesto. Sin embargo, esto equivale a una declaración formal de que uno está dejando la Iglesia, por lo que el ciudadano en cuestión perderá el derecho a recibir la asistencia religiosa de la confesión a la que pertenecía hasta ese momento.

Este impuesto es recaudado por el Estado en nombre de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica y transferido posteriormente a las instituciones centrales de las mismas, quienes posteriormente decidirán cómo repartir estas cantidades entre las distintas congregaciones individuales constituidas a lo largo del país. En cualquier caso, la relación jurídica que origina el deber de satisfacer el impuesto eclesiástico no opera entre los ciudadanos y el Estado, sino entre los ciudadanos y la respectiva confesión religiosa.

Sin embargo, la relación tributaria entre el Estado y las confesiones religiosas mayoritarias (Iglesia Católica e Iglesia Evangélica) no se limita al *kirchensteuer*. Todos los estados federados han establecido una contribución religiosa local (*kirchgeld*, en alemán) recaudada exclusivamente en beneficio de las comunidades religiosas locales. Esta contribución es una suma fija, cuya cuantía varía entre los distintos *Länder*, no estando relacionada con los ingresos de los contribuyentes. El *kirchgeld* debe ser satisfecho por los miembros de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica (en base a las listas fiscales mencionadas anteriormente) , y su pago es también requerido a aquellos individuos que no tenían la obligación de satisfacer el *kirchensteuer* (pensionistas, personas de bajos ingresos, cónyuges sin ingresos, etc.).

En última instancia, es necesario mencionar que en Alemania el Estado delega gran parte de sus responsabilidades en política social a entidades independientes. En la práctica, esto conlleva que gran parte de los servicios sociales alemanes sean provistos por las dos comunidades religiosas mayoritarias, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, para lo cual reciben importantes cantidades de dinero público.

En definitiva, en Alemania existe un fuerte sistema de cooperación entre las dos confesiones religiosas mayoritarias, que han alcanzado el estatus de Corporación de Derecho Público, y el Estado.

Dinamarca

Como hemos comentado anteriormente, el establecimiento de impuestos religiosos es un sistema de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas muy arraigado en los países nórdicos. Presentamos ahora el caso de Dinamarca.

La actual Constitución de Dinamarca, promulgada en 1953, establece en su Artículo 4 que la Iglesia Evangélico-Luterana (la confesión enormemente mayoritaria del país) es la Iglesia Nacional Danesa, y que como tal recibirá el apoyo del Estado. El Artículo 6 establece que el Rey debe ser miembro de la Iglesia Evangélico-Luterana. Por su parte, el Artículo 66 afirma que la ley regulará el estatuto de la Iglesia Nacional.

Con respecto a las restantes confesiones, el Artículo 68 de la Constitución afirma que la ley también regulará el régimen de las comunidades religiosas minoritarias.

De esta manera, nos encontramos con un Estado que, si bien garantiza la libertad religiosa y de culto, mantiene una confesión (en este caso la Evangélico-Luterana) como la religión oficial del mismo. Esta es la tónica habitual en los países nórdicos.⁷

Con respecto a la financiación de la Iglesia Nacional Danesa, su principal fuente de ingresos es el impuesto eclesiástico, establecido con tal finalidad. Al contrario que el impuesto religioso alemán, el cual se constituía como un impuesto religioso recaudado por el Estado, este se trata de un impuesto estatal con afectación a fines religiosos. La diferencia radica en que, en este caso, la relación jurídica que origina el deber de satisfacer el impuesto opera entre los ciudadanos y el Estado. De esta manera, el Estado no actúa como un mero recaudador, sino que se encarga de exigir la coactividad del impuesto y es quien elige la distribución del importe recaudado. Solamente los fieles de la Iglesia Nacional Danesa deben satisfacer este impuesto.

En el caso danés, a los ingresos procedentes del impuesto eclesiástico deben añadirse algunas partidas que el Estado consigna a su favor en los presupuestos generales. Es decir, el impuesto eclesiástico convive con dotaciones presupuestarias. Estas dotaciones se destinan al pago de salarios y pensiones de los ministros de culto o a la reparación de edificios de valor histórico.

En lo que respecta a las restantes confesiones religiosas, estas pueden ser reconocidas a través de Real Decreto o ser aprobadas bajo la Ley de Formación y Disolución del Matrimonio. Esto les confiere reconocimiento oficial para mantener

⁷ Sin embargo, a diferencia del resto, Dinamarca es el único de los países nórdicos en el cual no existe un sínodo nacional. En el ámbito protestante, un sínodo es una junta de ministros de culto encargados de decidir sobre los asuntos eclesiásticos. De esta manera, la Iglesia Nacional Danesa permanece en gran medida bajo el control del Estado. El Ministro de Asuntos Eclesiásticos es la máxima autoridad administrativa de la Iglesia, mientras que los cánones de la Iglesia Evangélico-Luterana son promulgados por el Parlamento danés y sus regulaciones son parte del Derecho Público. Pese a esto, cada una de las parroquias elige un consejo que tiene una influencia considerable en la elección de los titulares de las mismas.

registros legales y para certificar matrimonios y bautizos válidos legalmente. Más de un centenar de comunidades religiosas han alcanzado este estatus, que en ningún caso les sitúa en posición de disfrutar de los privilegios económicos establecidos a favor de la Iglesia Nacional Danesa. De esta forma, las restantes confesiones religiosas no reciben ningún tipo de financiación directa.

Suecia

En Suecia, la confesión evangélico-luterana es la fe mayoritaria del país. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en el resto de países nórdicos, ninguna confesión es la religión oficial del Estado, de forma que la Iglesia Evangélico-Luterana de Suecia no es la Iglesia Nacional.

Hasta el siglo pasado, la Iglesia de Suecia sí poseía este estatus de Iglesia Nacional, pero durante la década de 1990 se inició un proceso “*disestablishment*” que culminó con la aprobación en 1998 de la Ley de Comunidades Religiosas y la Ley de la Iglesia de Suecia, las cuales entraron en vigor el 1 de Enero de 2000. Esto cambió radicalmente el panorama sueco en cuanto a las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas.

La entrada en vigor de esta legislación otorgó por primera vez personalidad jurídica a la Iglesia de Suecia y situó en la misma posición a su clero y al clero de las restantes confesiones religiosas. También supuso que la Corona y el Gobierno perdieran la capacidad que poseían para tomar importantes decisiones relativas a la misma (por ejemplo, era la Corona quien, con el asesoramiento del Ministro de Asuntos de la Iglesia, nombraba a importantes cargos de la Iglesia de Suecia).

Por su parte, con la nueva legislación toda organización religiosa que cumpla unos criterios básicos tiene la capacidad para registrarse como una comunidad religiosa y adquirir personalidad jurídica. Este registro no es obligatorio, pero sí es un requisito necesario para cualquier confesión que quiera beneficiarse de la financiación pública o tener la capacidad de formalizar matrimonios reconocidos civilmente.

Con respecto a la financiación de las confesiones religiosas, cuando la Iglesia Evangélico-Luterana de Suecia ostentaba el estatus de Iglesia Nacional existía un impuesto eclesiástico con un funcionamiento similar al del impuesto eclesiástico danés, explicado anteriormente. Es decir, la Iglesia de Suecia se financiaba a través de un impuesto estatal con afectación a fines religiosos, el cual era satisfecho por los fieles de la Iglesia y constituía su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, la nueva legislación aprobada a finales del siglo pasado supuso la supresión de este impuesto eclesiástico. Este fue reemplazado por un conjunto de tasas y cuotas de membresía que son recaudadas a través del sistema impositivo en colaboración con la administración pública. Toda confesión religiosa registrada tiene derecho a recibir estas ayudas económicas.

Otros casos

Acabamos de exponer el funcionamiento de los sistemas de cooperación económica con las confesiones religiosas establecidos en Alemania, Dinamarca y Suecia. Aunque los tres casos se engloban dentro del modelo de financiación a través de impuestos eclesiásticos, hemos podido comprobar que existen diferencias relevantes entre los mismos. En Alemania existe un impuesto religioso recaudado por el Estado; en Dinamarca un impuesto estatal con afectación a fines religiosos; en Suecia el impuesto eclesiástico ha sido sustituido por un conjunto de tasas y cuotas recaudadas por la administración pública.

A continuación, expondremos brevemente la situación de otros países que se han decantado por establecer impuestos eclesiásticos como método de financiación de las confesiones religiosas.

En **Austria** existe un sistema de cooperación económica con las confesiones religiosas muy similar al alemán. En el sistema legal austríaco, las organizaciones religiosas pueden alcanzar distintos estatus: sociedades religiosas oficialmente reconocidas, comunidades religiosas confesionales y asociaciones. Más de una decena de confesiones religiosas han sido oficialmente reconocidas, lo que las cualifica para proveer instrucción religiosa en los colegios públicos.

En lo que al impuesto eclesiástico respecta, este se trata de un impuesto religioso recaudado por el Estado. Las confesiones que se benefician de este sistema son la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Veterocatólica y la Comunidad Israelita, siendo los sujetos obligados al pago del impuesto eclesiástico los miembros mayores de edad de estas confesiones. Son las propias confesiones las que establecen la cuantía y el modo de recaudación y, al igual que en el caso alemán, se trata de un impuesto de pertenencia, por lo que la salida o baja de un miembro de cualquiera de estas cuatro confesiones le libera de la obligación de contribuir.

Finlandia es otro país donde se ha establecido un impuesto eclesiástico. En el caso finés, dos son las confesiones que han sido establecidas como Iglesia Estatal: la Iglesia Evangélico-Luterana (la comunidad religiosa ampliamente mayoritaria del país) y la Iglesia Ortodoxa de Finlandia (que cuenta con unos 60.000 fieles, poco más del 1% de la población total del país). Ambas confesiones se benefician de un impuesto eclesiástico, que se articula como un impuesto religioso recaudado por el Estado (al igual que el impuesto eclesiástico alemán y austríaco). Es decir, este impuesto religioso es recaudado por el Estado en nombre de las confesiones religiosas, quienes reembolsarán al mismo parte del importe recibido en concepto de costes de administración. Todos los ciudadanos pertenecientes a alguna de las dos Iglesias Estatales deben abonar el impuesto eclesiástico, consistente en una recarga del impuesto sobre la renta, y aquellos que no quieran pagarlo deben renunciar como fieles de su respectiva comunidad religiosa.

d) Modelos sin financiación económica directa

Analizamos en este apartado la situación de aquellos países en los que no se produce una financiación estatal directa, es decir, en los cuales no cabe la posibilidad de implantar un sistema de financiación como los comentados anteriormente. En estos casos la cooperación económica entre las confesiones religiosas y el Estado se limita a una financiación indirecta.

No son muchos los países que han optado por eliminar todo tipo de financiación directa a las confesiones religiosas, pero existen algunos que podrían encuadrarse dentro de esta categoría. Exponemos su situación a continuación.

Francia

Francia es el país europeo en el que más estrictamente se ha eliminado la financiación directa a las confesiones religiosas (aunque ciertamente aún existen situaciones en las que esta se mantiene, como explicaremos a continuación).

Las comunidades religiosas y el Estado han permanecido separados desde la aprobación en 1905 de la Ley de separación de la Iglesia y el Estado, que en su artículo 2 establece: *“La República no reconoce, ni paga ni subsidia religión alguna. [...] se suprimirán de los presupuestos del Estado, los departamentos y las comunas todos los gastos relacionados con el ejercicio de los cultos”*.

De esta manera, el Estado no sustenta mediante ayudas económicas directas ningún culto, de forma que la financiación estatal de las confesiones religiosas se ve reducida a la vía indirecta. Es decir, las relaciones económicas entre las comunidades religiosas y el Estado se limitan al reconocimiento de determinados beneficios fiscales a favor de las primeras.⁸

Esta financiación indirecta se articula a través de dos vías. Por una parte, las confesiones religiosas pueden beneficiarse de numerosas exenciones fiscales, lo que les permite disfrutar de un régimen fiscal muy favorable. Por otra, se establece una reducida deducibilidad en las declaraciones del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades para aquellas personas físicas y jurídicas, respectivamente, que realicen donaciones a favor de las confesiones religiosas.

⁸ Pese a ello, en Francia todavía existen situaciones en las que se mantiene una financiación directa de las confesiones religiosas. Los antiguos territorios de Alsacia y Lorena, compuestos ahora por los departamentos franceses de Moselle, Bas Rhin y Haut Rhin, eran territorio alemán cuando la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado fue aprobada, por lo que el Concordato Napoleónico permanece todavía en vigor en gran medida. En materia religiosa, esto implica que cuatro confesiones religiosas reconocidas han adquirido estatus oficial en estas regiones: la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Católica y la Comunidad Judía. Esto les permite disfrutar de una ventajosa situación financiera y fiscal, puesto que se han establecido dotaciones presupuestarias (el clero de estas cuatro comunidades religiosas mencionadas es retribuido por el Estado) y un sistema de asignación tributaria a favor de dichas confesiones.

Las organizaciones religiosas no están obligadas a registrarse, pero inscribirse en el registro es requisito necesario para poder disfrutar de los beneficios fiscales establecidos y obtener reconocimiento oficial. El Gobierno define dos categorías bajo las cuales las comunidades religiosas pueden registrarse

En primer lugar se encuentran las asociaciones de culto. Estas solamente pueden organizar actividades religiosas, definidas como servicios y prácticas litúrgicas. Actividades tales como dirigir una empresa editorial o una escuela pueden descalificar a una comunidad religiosa en el proceso de registro como asociación de culto. Estas asociaciones disfrutan de las exenciones fiscales comentadas anteriormente.

En segundo lugar se encuentran las asociaciones culturales. Las asociaciones culturales sí pueden participar en actividades mercantiles. Estas asociaciones no disfrutan del beneficioso régimen fiscal aplicable a las asociaciones de culto, pero pueden recibir subsidios gubernamentales para sus actividades culturales y educativas.

Normalmente, las confesiones religiosas se registran bajo ambas categorías, dadas las ventajas que otorgan ambos estatus.

Estados Unidos

Estados Unidos es otro de los países que se ha destacado por implementar una fuerte separación entre las confesiones religiosas y el Estado. Las líneas directrices que definen el modelo norteamericano en materia religiosa se sintetizan en dos grandes cláusulas, que exponemos a continuación.

En primer lugar, la *“Non establishment clause”*, que imposibilita la promulgación de normas jurídicas en virtud de las cuales se adopte una o varias religiones de Estado.

En segundo lugar, la *“Free exercise clause”*, que prohíbe al Estado dictar normas que impidan el libre ejercicio de la religión.

Esta legislación imposibilita la adopción de sistemas de financiación directa a las confesiones religiosas, semejantes a los expuestos a lo largo de los apartados anteriores. De esta manera, en Estados Unidos la cooperación económica entre el Estado y las confesiones religiosas se limita a una cooperación indirecta. El principal instrumento de esta financiación indirecta es el establecimiento de cuantiosas deducciones en el impuesto de la renta de aquellas personas físicas que realicen donaciones a favor de alguna confesión religiosa. En el caso estadounidense, el régimen de beneficios fiscales a las donaciones es mucho más generoso que el homólogo francés.

9. Conclusiones y recomendaciones de política pública.

Posibles extensiones del trabajo.

En este último apartado expondremos las principales conclusiones extraídas tras la realización de este trabajo y posibles recomendaciones para el decisor público. También señalaremos las posibles extensiones que podrían realizarse.

En primer lugar, sintetizaremos de forma muy resumida y a modo de recordatorio los distintos sistemas de financiación de las confesiones religiosas que han existido en España tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

En lo que respecta a la **Iglesia Católica** (el catolicismo es la fe ampliamente mayoritaria de nuestro país), la cooperación económica entre el Estado y la misma se articula fundamentalmente a través del Acuerdo de Asuntos Económicos (AAE) de 1979, firmado entre España y la Santa Sede. En lo relativo a la financiación directa, la Iglesia Católica se ha visto beneficiada desde la firma de este acuerdo de tres sistemas de financiación diferentes, que han ido superándose progresivamente: inicialmente, un sistema de dotación presupuestaria; posteriormente, un sistema mixto, que combinaba la dotación presupuestaria con la asignación tributaria; y en la actualidad, un sistema de asignación tributaria. En lo relativo a la financiación indirecta, el AAE establecía una serie de beneficios fiscales a favor de la Iglesia Católica, articulados mediante supuestos de no sujeción y exenciones. Por otra parte, la Iglesia Católica tiene su régimen fiscal asimilado al de las entidades sin fines lucrativos, lo que en la práctica significa una ampliación del conjunto de beneficios fiscales reconocidos.

En lo que respecta a las **restantes confesiones religiosas**, debe hacerse una importante distinción entre aquellas que han alcanzado un Acuerdo de Cooperación con el Estado (judíos, musulmanes y evangélicos) y las que no. En lo relativo a la financiación directa, las primeras se benefician de una serie de dotaciones gestionadas y otorgadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia, una fundación del sector público estatal; por el contrario, las segundas no se benefician de ningún tipo de financiación directa. En lo relativo a la financiación indirecta, las primeras se ven favorecidas por un conjunto de beneficios fiscales recogidos en sus respectivos acuerdos de cooperación, y al igual que la Iglesia Católica tienen su régimen fiscal asimilado al de las entidades sin fines lucrativos; las segundas también son susceptibles de beneficiarse del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, pero para ello deberán cumplir los requisitos exigidos por ley.

Por otra parte, es necesario realizar una conclusión global acerca del actual régimen de financiación de las confesiones religiosas en España, señalando las fortalezas y debilidades del mismo a la luz de los principios económicos mencionados a lo largo del trabajo y la experiencia comparada.

Como expusimos en los apartados referentes a la financiación directa e indirecta recibida por las confesiones religiosas en España, la Iglesia Católica ostenta

una posición hegemónica con respecto a las restantes confesiones religiosas, puesto que goza de un estatus que le permite acceder a medios de promoción económica que se encuentran vedados para el resto de confesiones (especialmente en lo que a la financiación directa se refiere). Sin embargo, también es cierto que las confesiones religiosas minoritarias que han alcanzado un acuerdo de cooperación con el Estado (hasta ahora han sido judíos, musulmanes y evangélicos quienes lo han hecho) gozan de un trato jurídico y económico más favorable que aquellas comunidades religiosas que no han alcanzado acuerdos de este tipo. De esta manera, no sería descabellado afirmar que en España existe un sistema de tres niveles en lo que al régimen de financiación de las confesiones religiosas se refiere. En el primer escalón se situaría la Iglesia Católica, que disfruta de una posición prominente con respecto a las restantes confesiones religiosas. En el segundo escalón se situarían las comunidades religiosas que han alcanzado un acuerdo de cooperación con el Estado, es decir, FCIE, CIE y FERED. Por último, en el tercer escalón se encontrarían las restantes confesiones religiosas minoritarias, que simplemente se encuentran registradas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Esta situación de desigualdad supone una quiebra de los principios económicos de no discriminación, suficiencia y estabilidad financiera en el tiempo, como expusimos en apartados anteriores.

El análisis respecto al **principio de laicidad**, también denominado principio de separación Iglesia-Estado, resulta un poco más complejo. En el análisis valorativo expuesto en el apartado 7 se aprecia claramente como la opinión de los distintos autores presentados acerca de lo que ellos entienden por separación entre el Estado y el fenómeno religioso varía notablemente. Esta disparidad de criterios complica el estudio acerca de si el actual estado de cosas en lo referente al régimen de financiación de las confesiones religiosas viola el principio de laicidad o no.

Si acudimos al análisis comparado, podemos observar que en Europa existen numerosos casos en los cuales una determinada confesión religiosa posee el estatus de religión oficial del Estado (Grecia, Noruega o Dinamarca son algunos ejemplos). Todavía más numerosos son los casos en los que el Estado financia a través de dotaciones presupuestarias a una o más confesiones (a los ejemplos anteriores podríamos añadir el caso de Bélgica o de numerosos países de Europa del Este, como Rumanía o Bulgaria). En nuestra opinión, esto supone una clara quiebra del principio de laicidad, pese a que en estos países se reconozca el derecho a la libertad religiosa y se otorguen garantías a las comunidades religiosas para operar y gestionar sus asuntos internos con libertad.

Desde el punto de vista comparativo y en relación a los países presentados en el párrafo anterior, podríamos afirmar que el régimen de financiación de las confesiones religiosas vigente en España no viola el principio de laicidad.

Sin embargo, desde una conceptualización más estricta del principio de laicidad, entendido como la total separación entre el Estado y el fenómeno religioso y

la total neutralidad del Estado frente a la cosmovisión y los posicionamientos de los ciudadanos con respecto al mismo, el principio de laicidad queda ciertamente agraviado.

Si recurrimos a la experiencia comparada, presentada en el apartado anterior, vemos que es Francia el país que más ha avanzado en la realización del principio de laicidad. En Francia se ha establecido una separación notablemente estricta entre el Estado y el fenómeno religioso, la cual lógicamente también afecta al ámbito de la cooperación económica. Consideramos que esta es la dirección en la que debe avanzar la agenda reformista española en cuanto a la cooperación económica del Estado y las confesiones religiosas en nuestro país. Para ello debería transitarse desde el actual sistema de asignación tributaria hasta un sistema en el que desapareciese la financiación directa del Estado a las confesiones religiosas, limitándose esta cooperación económica a la vía indirecta.

En última instancia y para finalizar este Trabajo de Fin de Grado haré alusión a una posible **extensión** del mismo. A nuestro juicio, la principal carencia de este trabajo es la falta de un estudio acerca de la relación existente entre la financiación estatal directa recibida por la Iglesia Católica y la evolución del ciclo económico en España.

Como hemos expuesto en este trabajo, actualmente la Iglesia Católica recibe financiación estatal de forma directa a través de un sistema de asignación tributaria. Este sistema permite a los contribuyentes consignar un determinado porcentaje de la cuota íntegra del IRPF a favor de esta confesión religiosa. Dada la relativa estabilidad del porcentaje de personas que marcan la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta con respecto al total de declarantes, los ingresos obtenidos por la misma a través de este sistema dependen fundamentalmente de tres factores: el número de declarantes, la cuantía de la cuota íntegra de dichos declarantes y los cambios en la propia normativa del tributo⁹.

De esta manera, sería interesante estudiar la relación entre los ingresos obtenidos por la Iglesia Católica a través del sistema de asignación tributaria y la evolución del PIB español, ya que las variaciones del PIB pueden afectar tanto al número de declarantes como a los ingresos de los contribuyentes, y por tanto a la cuantía de la cuota íntegra en su declaración del IRPF. Además, el inicio de la Gran Recesión (España registró caídas del PIB entre 2008 y 2014) y el actual contexto de recuperación económica configuran un entorno propicio para este estudio. Esta sería sin duda una interesante extensión de este trabajo, que podría ampliarse todavía más con la elaboración de un modelo económico y su estimación econométrica posterior en el que se estudiaran las variables (más allá de la evolución del PIB) que determinan la cuantía conferida a la Iglesia Católica a través del sistema de asignación tributaria.

⁹ Por ejemplo, si el Estado decidiera reducir los tipos impositivos del tributo, indirectamente se produciría una merma en la cuantía de las asignaciones de los contribuyentes a la Iglesia Católica, ya que estas se calculan como el 0,7% de la cuota íntegra declarada.

Bibliografía

- TORRES GUTIÉRREZ, A. (2005). "La financiación de las confesiones religiosas en España". *Estudios de Progreso, Fundación Alternativas*.
- TORRES GUTIÉRREZ, A. (2011). "La financiación de las religiones en el espacio europeo: raíces públicas de la financiación de las confesiones religiosas en una Europa laica". *Proyecto de investigación: "Instrumentos jurídicos de integración de la diversidad"*.
- MARTÍN SÁNCHEZ, I. (2006). "La financiación de las confesiones religiosas en España". *Fundación Universitaria Española, Madrid*.
- MARTÍN DEGANO, I. (2006). "Los sistemas de financiación de las confesiones religiosas en España". *Revista catalana de dret públic, núm. 33, p. 113-147*.
- Informe Fundación 1º de Mayo. (2012). "Financiación de la Iglesia Católica y gasto público".
- MARTÍNEZ MORENO, R. (2014). "La financiación de las confesiones religiosas en España". *Trabajo Fin de Grado, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Pública de Navarra*.
- LOBO HERRERO, P. (2015). "Financiación directa del Estado a las confesiones religiosas: crisis del modelo actual. Hacia la autofinanciación". *Trabajo Fin de Grado, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Universidad de Valladolid*.
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, E. M. (2016). "Las confesiones religiosas y los beneficios fiscales: exenciones en el IBI". *Revista digital CEMCI, núm. 32*.
- Página web de la Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es (consultada en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018)
- BARKER, CHRISTINE. (2000). "Church and State relationships in German Public Benefit Law". *The international Journal of Not-for-Profit Law, Volume 3, Issue 2*.
- FERRARI, SILVIO. (1995). "The Emerging Pattern of Church and State in Western Europe: The Italian Model". *BYU Law Review, Volume 1995, Issue 2*.
- CRANMER, FRANK; LUCAS, JOHN; MORRIS, BOB. (2006). "Church and State. A mapping exercise". *The Constitution Unit Department of Political Science UCL (University College London)*.
- European Liberal Forum. (2012). "Separation of church and state in Europe. With views on Sweden, Norway United Kingdom & Ireland, The Netherlands, France, Portugal, Italy and Slovenia".
- THORSON PLESNER, INGVI. (2001). "State Church and Church autonomy in Norway".

- CRANMER, FRANK. (2011). "Notes on Church and State in the European Economic Area". *Honorary Research Fellow, Centre for Law and Religion, Cardiff Law School*.
- LIPKA, MICHAEL. (2014). "In some European countries, church membership means paying more taxes". *Pew Research Center*.
- Página web del Gobierno Italiano: www.governo.it (consultada en los meses de mayo y junio de 2018)

Legislación

- Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.
- Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.
- Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
- Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España.
- Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.
- Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (disposición derogada).
- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Anexo 1

Datos económicos acerca del sistema de dotación presupuestaria

Como explicamos anteriormente, entre 1980 y 1987 la financiación pública de la Iglesia Católica corría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, donde se consignaba una dotación presupuestaria en su favor. Los importes de la misma (expresados en euros) fueron los siguientes durante estos años.¹⁰

| Año | Dotación presupuestaria |
|------------|--------------------------------|
| 1980 | 45.614.126 |
| 1981 | 51.087.844 |
| 1982 | 55.685.750 |
| 1983 | 62.368.048 |
| 1984 | 66.421.971 |
| 1985 | 71.071.508 |
| 1986 | 76.188.658 |
| 1987 | 79.998.089 |

¹⁰ Fuente: Informe Fundación 1º de Mayo (2012). “Financiación de la Iglesia Católica gasto público”.

Anexo 2

Datos económicos acerca del sistema mixto

A partir de 1988 entró en vigor el denominado sistema mixto. Este sistema de financiación introducía la asignación tributaria pero mantenía parcialmente la dotación presupuestaria, que se constituía como un complemento dinerario en el caso de que la cantidad percibida por la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria no alcanzara el importe actualizado de la cantidad percibida en 1987.

Este sistema mixto de financiación se mantuvo hasta el año 2006. A continuación mostramos los ingresos percibidos por la Iglesia Católica durante este periodo de tiempo, expresados en euros.¹¹

| Año | Recaudado por asignación tributaria | Complemento presupuestario del Estado | Total recibido por la Iglesia Católica |
|------------|--|--|---|
| 1988 | 41.677.652 | 41.520.363 | 83.198.015 |
| 1989 | 44.854.968 | 40.838.988 | 85.693.956 |
| 1990 | 54.788.764 | 36.925.683 | 91.714.447 |
| 1991 | 70.187.976 | 21.526.471 | 91.714.447 |
| 1992 | 80.773.720 | 10.940.727 | 91.714.447 |
| 1993 | 85.429.539 | 6.284.908 | 91.714.447 |
| 1994 | 91.287.368 | 18.697.847 | 109.985.215 |
| 1995 | 90.001.093 | 23.806.559 | 113.807.652 |
| 1996 | 93.876.542 | 23.897.790 | 117.774.332 |
| 1997 | 91.738.823 | 29.136.731 | 120.875.554 |
| 1998 | 101.081.717 | 22.318.088 | 123.399.805 |
| 1999 | 107.141.045 | 18.479.957 | 125.621.002 |
| 2000 | 97.681.592 | 30.451.833 | 128.133.425 |
| 2001 | 107.289.392 | 23.406.724 | 130.696.116 |
| 2002 | 106.038.636 | 27.271.403 | 133.310.039 |
| 2003 | 116.158.283 | 19.817.953 | 135.976.236 |
| 2004 | 116.484.271 | 22.211.489 | 138.695.760 |
| 2005 | 128.682.326 | 12.787.354 | 141.469.680 |
| 2006 | 173.753.065 | - | 173.753.065 |

¹¹ Fuente: Página web de la Conferencia Episcopal Española
<http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-de-la-campana-de-la-renta-1988-2005/>

Anexo 3

Datos económicos acerca del sistema de asignación tributaria

Por último, a partir del año 2007 comenzó a operar de forma efectiva el sistema de asignación tributaria, que se ha mantenido en funcionamiento hasta la actualidad. A continuación mostramos el importe que la Iglesia Católica ha recibido anualmente a través de este sistema de financiación, junto a otra información relevante.¹²

| Año | Importe en € | Nº declaraciones | Porcentaje declaraciones |
|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2007 | 241.327.321 | 6.958.012 | 34,38% |
| 2008 | 253.423.689 | 7.195.155 | 34,31% |
| 2009 | 249.983.345 | 7.260.138 | 34,75% |
| 2010 | 248.600.716 | 7.454.823 | 35,71% |
| 2011 | 247.935.801 | 7.357.037 | 34,83% |
| 2012 | 248.521.593 | 7.339.102 | 34,87% |
| 2013 | 249.911.425 | 7.268.597 | 34,88% |
| 2014 | 252.287.369 | 7.291.771 | 34,76% |
| 2015 | 249.614.608 | 7.347.612 | 34,93% |
| 2016 | 256.661.678 | 7.112.844 | 33,54% |

¹² Fuente: Portal de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española
<http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/procedimiento.html>

Anexo 4

Importe anual (en euros) de las partidas otorgadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia a la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCIE), la Comisión Islámica de España (CIE) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)¹³

La Fundación Pluralismo y Convivencia tiene dos líneas de ayudas a las comunidades religiosas que alcanzaron un Acuerdo de Cooperación con el Estado. La Línea 1 consiste en ayudas a nivel estatal a las federaciones que firmaron estos acuerdos. Van dirigidas al fortalecimiento y desarrollo institucional de estas confesiones. La línea 2 consiste en ayudas a las comunidades religiosas locales que integran dichas federaciones, es decir, son ayudas a nivel local. Van dirigidas al desarrollo de actividades de carácter cultural, educativo y de integración social.

Línea 1

| Año | FCIE | CIE | FEREDE |
|------------|-------------|------------|---------------|
| 2011 | 329.754,50 | 592.325,00 | 722.754,71 |
| 2012 | 215.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 2013 | 169.133,00 | 270.891,55 | 382.429,18 |
| 2014 | 163.785,02 | 219.500,00 | 350.483,43 |
| 2015 | 163.785,02 | 229.500,00 | 344.241,32 |
| 2016 | 169.362,83 | 255.000,00 | 356.800,00 |
| 2017 | 169.362,83 | 255.000,00 | 356.800,00 |
| 2018 | 169.362,50 | 255.000,00 | 356.800,00 |

Línea 2

En este caso indicaremos simplemente el importe total concedido cada año, puesto que este se desgrega en numerosas partidas destinadas a entidades religiosas locales que integran las federaciones mencionadas anteriormente.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Importe total concedido | 2.526.310,80 | 855.000,00 | 425.197,47 | 273.745,12 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Importe total concedido | 164.741,32 | 211.205,00 | 120.000,62 | 117.000,00 |

¹³ Fuente: Página web de la Fundación Pluralismo y Convivencia
<http://www.pluralismoyconvivencia.es/ayudas/>

